



**UNIVERSIDAD NACIONAL
PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA DE POSTGRADO**



**MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN CIENCIAS
PENALES**

**“PRISIÓN EFECTIVA POR REVOCATORIA Y FINES DE
LA PENA EN LOS DELITOS DE OMISIÓN DE
ASISTENCIA FAMILIAR EN EL DISTRITO DE
LAMBAYEQUE 2012-2014”**

TESIS

**Tesis presentada para optar el Grado Académico de
Maestro en Derecho con mención en CIENCIAS
PENALES**

PRESENTADA POR:

Segundo Benjamín Adrianzén Cieza

LAMBAYEQUE – PERÚ

2017

**“PRISIÓN EFECTIVA POR REVOCATORIA Y FINES DE LA PENA
EN LOS DELITOS DE OMISIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR EN EL
DISTRITO DE LAMBAYEQUE 2012-2014”**

SEGUNDO BENJAMÍN ADRIANZÉN CIEZA
AUTOR

Dr. JOSE MARIA BALCAZAR ZELADA
ASESOR

Presentada a la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional
Pedro Ruiz Gallo para optar el Grado de MAESTRO EN DERECHO
CON MENCIÓN CIENCIAS PENALES

APROBADO POR:

Dr. AMADOR MONDOÑEDO VALLE
PRESIDENTE DEL JURADO

Dr. FRANCISCO SANTIAGO PAREDES DELGADO
SECRETARIO DEL JURADO

Dr. RICARDO PONTE DURANGO
VOCAL DEL JURADO

DEDICATORIA

Gracias a esas personas importantes en mi vida, que siempre estuvieron listas para brindarme toda su ayuda, ahora me toca regresar un poquito de todo lo inmenso que me han otorgado. Con todo mi cariño esta tesis se las dedico a ustedes.

Fiorella, Antonella y arabella

AGRADECIMIENTO

A Dios.

Por haberme permitido llegar hasta este punto y haberme dado salud para lograr mis objetivos, además de su infinita bondad y amor.

A mi esposa.

Por haberme apoyado en todo momento, por sus consejos, sus valores, por la motivación constante que me ha permitido ser una persona de bien, pero más que nada, por su amor.

ÍNDICE

RESUMEN.....	7
ABSTRACT	8
INTRODUCCIÓN.....	9
CAPÍTULO I	14
ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO.....	14
CAPÍTULO II	19
MARCO TEÓRICO.....	19
2.1. Pena	19
2.1.1. Concepto de Pena:.....	19
2.1.2. Fines de La Pena.....	21
2.1.3. Conversión de la Pena.....	28
2.1.4. Revocación de la Conversión	29
2.2. Bien Jurídico.....	37
2.2.1. Concepto de Bien Jurídico	37
2.3. Derecho Alimentario	38
2.3.1. Concepto Jurídico de Alimentos.....	38
2.3.2 Tipificación del Derecho Alimentario	40
2.4. Omisión	44
2.4.1. Concepto de Omisión.....	44
2.4.2. Tipos de Omisión.....	48
2.5. Asistencia Familiar.....	53
2.5.1. Concepto Jurídico de Asistencia Familiar.	53
2.6. Delito de Omisión a la Asistencia Familiar	54
2.6.1. Clases de Delito de Omisión a la Asistencia Familiar	57
2.6.2. Tipificación del Delito de Omisión a la Asistencia Familiar	57
2.6.3. Contexto Actual en delitos de OAF	61
2.6.4. Contexto Actual de Revocatoria y Conversión de Pena en delitos de OAF	62
CAPÍTULO III	70
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE O LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS	70

CONCLUSIONES.....	78
RECOMENDACIONES.....	79
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	80
ANEXOS.....	85

RESUMEN

La presente tesis denominada “*Prisión efectiva por revocatoria y fines de la pena en los delitos de Omisión de Asistencia Familiar en el distrito de Lambayeque 2012-2014*”, tiene como problema de investigación la siguiente interrogante: ¿en qué medida la prisión efectiva, por efecto de la revocación de la condicionalidad de la pena en los delitos de omisión de asistencia familiar influye en el cumplimiento de los fines de prevención, protección y resocialización de la misma, en el distrito de Lambayeque en el periodo del 2012 al 2014?. El objetivo planteado es establecer en qué medida la prisión efectiva por revocatoria de la condicionalidad de la pena, en los delitos de O.A.F (2012-2014), influye en el cumplimiento de los fines de prevención, protección y resocialización de la misma. La hipótesis responde a la siguiente premisa: Si se revoca la condicionalidad de la pena en los delitos de O.A.F. del distrito de Lambayeque comprendidos entre el periodo 2012-2014, entonces se cumplirán de manera efectiva los fines de prevención, protección y resocialización de la misma. Además, para ello, se ha empleado como sustento teórico, estudios sobre La revocatoria de la pena, los delitos de Omisión de Asistencia Familiar y los Fines de la pena: prevención, protección y resocialización. El tipo de investigación es Descriptiva, analítica, documental, utilizando un método deductivo e inductivo, con un diseño no experimental retrospectiva. Las técnicas de recolección de datos utilizadas son el Estudio de Gabinete y la encuesta, procesando los datos estadísticos a través del Programa Microsoft Excel. Así pues, se obtuvo como resultado que sí se logra cumplir con los fines de la pena mencionados, al revocarse la condicionalidad de la pena de los delitos de O.A.F. en el distrito de Lambayeque, entre el período 2012-2014.

PALABRAS CLAVE: Revocatoria, Fines de la Pena, Omisión de Asistencia Familiar.

ABSTRACT

This thesis called "effective Prison for revocation and purposes of punishment in crimes of omission Family Assistance in the district of Lambayeque 2012-2014" has the research problem the following question: to what extent effective prison for effect of the revocation of conditionality penalty in crimes of omission family care influences the fulfillment of the aims of prevention, protection and re-socialization of it, in the district of Lambayeque in the period from 2012 to 2014?. The stated objective is to establish the extent to which effective prison for revocation of the conditionality of punishment for crimes of OAF (2012-2014), affecting the implementation of the aims of prevention, protection and re-socialization of it. The hypothesis answers the following premise: If conditionality is revoked penalty in crimes of OAF Lambayeque district ranging from the period 2012-2014, then effectively meet the purposes of prevention, protection and re-socialization of it. In addition to this, it has been used as a theoretical basis, studies on the revocation of the sentence, crimes of omission and Family Assistance purposes of punishment: prevention, protection and rehabilitation. The research is descriptive, analytical, documentary, using a deductive and inductive method, with a non-experimental design retrospective. The data collection technique used is the Study of Staff, processing statistical data through Microsoft Excel program. Thus, we obtained the result that if it can fulfill the purposes of the above sentence, to withdraw the conditionality penalty offenses OAF in the district of Lambayeque, between 2012-2014.

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo de investigación, se ha observado que entre los años dos mil doce y dos mil catorce, algunos jueces del juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque, declaraban fundada la solicitud de las partes de libertad anticipada, e ineficacia de resolución en los delitos de omisión de asistencia familiar, con el argumento de haber cumplido el sentenciado con el pago de las pensiones alimenticias devengadas y reparación civil impuesta; en otros casos, se ha revocado la pena suspendida ante el incumplimiento de estos pagos impuestos en las sentencias y convertido en penas efectivas, habiéndoseles dado ingreso al establecimiento penal de Chiclayo. Razón por la cual, se ha creído conveniente la presente investigación, formulándose el siguiente problema: ¿En qué medida la prisión efectiva, por efecto de la revocación de la condicionalidad de la pena en los delitos de omisión de asistencia familiar influye en el cumplimiento de los fines de prevención, protección y resocialización de la misma, en el distrito de Lambayeque en el periodo del 2012 al 2014?

El objetivo general planteado es establecer en qué medida la prisión efectiva por revocatoria de la condicionalidad de la pena, en los delitos de O.A.F (2012-2014), influye en el cumplimiento de los fines de prevención, protección y resocialización de la misma. Teniéndose como primer objetivo específico: identificar los casos de revocatorias de la pena de los delitos de Omisión de Asistencia Familiar; segundo: identificar los ingresos al penal por revocatoria de la pena de los delitos de O.A.F.; tercero: identificar los egresos del penal que fueron revocados en el delito de O.A.F.; cuarto: identificar la incidencia de los egresados del penal en la comisión de delitos; y quinto: analizar y determinar si los fines de prevención, protección y resocialización se cumplen en los casos de revocatorias de la pena de los delitos de O.A.F. Asimismo, la hipótesis responde a la siguiente premisa: si se revoca la condicionalidad de la pena en los delitos de O.A.F. del distrito de Lambayeque comprendidos entre el periodo 2012-2014, entonces se cumplirán de manera efectiva los fines de prevención, protección y resocialización de la misma.

Dentro de los antecedentes encontrados podemos resaltar la tesis de De La Cruz, Katheryn (2015) denominada *“La no aplicación de la suspensión de la pena en los delitos de Omisión a la Asistencia Familiar”*, cuyo objetivo es determinar si resulta conveniente o no suspender la ejecución de la pena en el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, en tanto el obligado no esté al día en el pago de las pensiones alimenticias señaladas en el proceso correspondiente. Con la finalidad de poder comprender las implicancias de las variables analizadas se ha valido de los aportes de la doctrina nacional e internacional de diversos autores. Después de haber desarrollado los diversos capítulos de la investigación, se concluyó que no resulta conveniente la aplicación de la suspensión de la ejecución de la pena en el delito de omisión a la asistencia familiar cuando el obligado al momento de emitir sentencia no haya cumplido con el pago de la liquidación de pensiones alimenticias que originaron el proceso, así como cuando no se encuentra al día en el pago de la pensión alimenticia fijada en la sentencia de alimentos. Esta investigación sirve de precedente a futuras investigaciones, a efectos de superar lo hasta aquí logrado. Por lo tanto, dado su relación directa con nuestra variable independiente de estudio: revocatoria de los delitos de Omisión de Asistencia Familiar, se ha tomado en cuenta para la comparación y discusión de resultados afines.

Asimismo, según Quispe, Erwin (2014) en su tesis: *“Problemas en la aplicación de la revocatoria de la suspensión de la ejecución de la pena y en su posterior conversión en la corte superior de justicia de Lambayeque”*, cuyo objetivo es determinar la problemática en cuanto a la aplicación de la revocatoria de la suspensión de la ejecución de la pena y en su posterior conversión en la corte superior de justicia de Lambayeque; se llegó a la conclusión que el juez no agota las medidas que establece el art. 59° del Código Penal antes de asumir la decisión de revocar la condicionalidad de la pena, dado su naturaleza de *ultima ratio*, de manera progresiva y previa convocatoria a una audiencia pública, con expresa concurrencia de las partes, para evitar de esta manera que la conversión de una pena que ya ha sido revocada por incumplimiento de las reglas de conducta, sea superpuesta por otro subrogado penal en el mismo caso. En este caso, el estudio tiene estrecha relación con la variable revocatoria, el cual permitió entenderlo y compararlo con el análisis del presente estudio.

De igual forma, Rojas, Freddy (2014) en su tesis “*Justificación jurídica del cese anticipado de la prisión por el delito de incumplimiento de Obligación Alimentaria*”, cuyo objetivo es determinar si puede justificarse jurídicamente el cese anticipado de la prisión de los condenados por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria (IOA), cuando posteriormente cumplieron con el pago de su obligación alimentaria, y en algunos casos adicionalmente la reparación civil, pese a no estar regulado legalmente. Para ello, bajo el enfoque cualitativo de investigación, se utilizó una metodología dogmático – formalista y de tipo jurídico - propositiva y documental, aplicando los métodos de interpretación histórico, sistemático, teleológico y constitucional de la dogmática jurídica, con los cuales, luego de recogidos los datos (disposiciones normativas, jurisprudencias, estudios dogmáticos, entre otros), se analizó, replanteó y reestructuró la finalidad del delito en mención, así como la constitucionalidad de la prisión que habilita, obteniéndose como resultado, una construcción argumentativa que permitió concluir que se trata de una criminalización *sui generis* permitida por la Constitución, que tiene como finalidad la tutela reparativa - coactiva del derecho alimentario, a través del uso de la prisión como medio coactivo de *ultima ratio* para lograr su satisfacción inmediata, y que por ello, la prisión que habilita, solo puede ser constitucional en cuanto sirva para cumplir dicha finalidad, de acuerdo al test de proporcionalidad, siendo que en el caso de los condenados que posteriormente cumplieron con el pago de su obligación alimentaria, y en algunos casos adicionalmente la reparación civil, no resulta constitucional la privación de su libertad por medio de la prisión, justificándose jurídicamente el cese anticipado de la misma. Esta investigación sirve para comparar la ejecutoria anterior del delito con la actual y también para proponer, en base a los resultados obtenidos en dicho estudio, las recomendaciones que más se ajusten a nuestra realidad actual.

Por último, Vásquez, Rosario (2014) en su tesis “*Fines de la aplicación de la conversión de la pena impuesta por los juzgados penales en la provincia de Chiclayo y la influencia de su aplicación en la resocialización de los sentenciados*”, cuyo objetivo es determinar el grado de aplicación de la conversión de la pena privativa de libertad por parte de los jueces penales de Chiclayo, como medio de conmutación de la pena impuesta en la sentencia por

una sanción de naturaleza distinta, si tiene efectos con la resocialización; se llegó a la conclusión que la conversión de la pena impuesta por los juzgados penales en la provincia de Chiclayo no cumplen en un porcentaje alto con los fines de la aplicación de la misma en relación a la resocialización de los sentenciados. Este estudio permitió tener un panorama sobre la realidad investigada y, además, utilizar como sustento la base teórica empleada.

En lo que respecta a la trascendencia científica, si bien, existen varios especialistas y, por consiguiente, una diversidad de libros que hablen acerca de la acción penal, dándonos conceptos, su importancia, sus características, etc., no se han registrado trabajos de investigación respecto al cumplimiento de los fines de la pena con la medida de prisión efectiva por efecto de la revocación en los delitos de omisión de asistencia familiar; siendo esto así, la trascendencia de la aplicación de la conversión de la pena, específicamente en los delitos de omisión de asistencia familiar, como facultad del juzgador que le otorga el artículo cincuenta y dos del Código Penal, u otra como la libertad anticipada, artículo 491° del código procesal penal, evitaría la severidad de imponer una pena privativa de libertad efectiva, dado los efectos que esta pena conlleva. Es preciso mencionar que el artículo 59° del código penal, el Juez puede optar según su criterio y a pedido de las partes, por una de las alternativas, contra el sentenciado, como es la amonestación, la prorroga y por último la revocatoria de la condicionalidad de la pena; sin embargo, la mayoría de jueces, opta por ésta última, tomándose en cuenta el hecho, que ya ingresado al penal, la libertad anticipada, ya no se aplica, según la casación de la Corte Suprema (382-2012 - La Libertad), no teniendo opción de solicitar su libertad, aún cuando ya pagaron todas las pensiones alimenticias devengadas y reparación civil, en los casos de omisión de asistencia familiar que nos ocupa.

Por tanto, esta investigación aportará al conocimiento de toda persona, referente al tema en estudio. Y, en cuanto a la utilidad social, dicho conocimiento favorecerá a toda aquella persona que requiera del mismo. Y finalmente, tendrá utilidad para todas aquellas personas que estén sumergidas en el ámbito de esta ciencia llamada Derecho, y todas sus ramas afines a ésta.

Finalmente, el estudio está estructurado de la siguiente forma: Capítulo I Análisis del Objeto de Estudio, Capítulo II Marco Teórico, Capítulo III Análisis y Discusión de Resultados, y culmina con las Conclusiones y Recomendaciones de la investigación.

CAPÍTULO I

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO

Uno de los grandes problemas de nuestra sociedad y que incumbe directamente a la administración de justicia, son los procesos jurisdiccionales penales por el delito de omisión a la asistencia familiar; siendo lo más agobiante, aquellos sentenciados que quieren burlar la prestación alimentaria a su cargo, comúnmente fingiendo y simulando tener otras obligaciones alimenticias, convergiendo voluntades criminales con otras personas, comúnmente allegados al obligado, con el propósito de no cumplir, pese de existir una sentencia condenatoria.

Realidad esta que se presenta a diario en los organismos jurisdiccionales a nivel nacional, en especial en los juzgados penales, toda vez que luego de ser sentenciado por el delito de omisión a la asistencia familiar y revocada la condicionalidad de la pena, la prisión efectiva se convierte en ineficaz por cuanto el obligado, solamente se limita en cumplir la pena, quedando en completo desamparo los beneficiarios de la pensión alimenticia. Esta situación, viene causando un malestar profundo en los alimentistas que acuden a los órganos jurisdiccionales con el propósito de que se les haga justicia.

En el artículo primero del Título Preliminar del Código Penal Vigente, se regula la prevención de los delitos y las faltas como medio de protección a la persona, siendo sus principios fundamentales: la ejecución de la pena, la responsabilidad penal como fundamento de la aplicación de la pena, proporcionalidad de la pena, la responsabilidad de los hechos, así como de protección, retribución y resocialización de la pena; sin embargo respecto al delito de Omisión de la Asistencia Familiar, su aplicación en la administración de justicia se presenta lenta y engorrosa, razones: excesiva carga procesal, presupuesto económico limitado entre otros .

Sobre el particular, cabe precisarse que antes de que la parte interesada denuncie penalmente por el delito de omisión a la asistencia familiar, primero ha debido recurrir a la vía civil por el pago de alimentos en alguna de sus formas, lo que implica que luego de admitida la demanda en la vía civil, se cumple con

todas las etapas establecidas hasta expedirse sentencia, en caso de no haber mediado conciliación entre los justiciables, haberse efectuado la liquidación de las pensiones alimenticias, aprobación y requerimientos de ley para recién poder recurrir a la vía penal correspondiente, lo cual evidentemente significa que en la práctica no sea un proceso sumarísimo, y muchas veces no obstante de que la demandante obtenga una sentencia favorable, no puede materializar el cobro del monto fijado en la misma, no debiendo olvidarse que el mayor porcentaje de las demandas sobre esta materia, proviene de personas pertenecientes a los estratos económicos más necesitados de la sociedad.

Nuestra preocupación al abordar este tema, es porque esta omisión dolosa vulnera al bien jurídico protegido como es la familia y no obstante haberse previsto su tramitación procesal y sancionar a los obligados que incumplen con este deber básico para el ser humano como es el de proveer los medios económicos para la subsistencia de los miembros de su familia, o a quienes la ley señala, el número de procesos sobre esta materia es elevado en relación a los otros delitos contra la familia.

Así mismo, “en el libro: Delito de la Omisión a la Asistencia Familiar de Campana Valderrama, se muestra datos estadísticos de la ciudad de Chincha sobre la Incidencia correspondiente a las causas ingresadas de Enero – Diciembre del 2000, en los Delitos Contra la Familia: Matrimonio Ilegal (dos casos), Delitos Contra el Estado Civil (cuatro casos), Delitos Contra la Patria Potestad (once casos) y Delitos de Omisión a la Asistencia Familiar (1,730 casos) registrados. Lo que significa que este último delito contra la familia representa el 99% y el resto de delitos el 1%”. (Ruiz, 2010)

Del mismo modo, “según los datos estadísticos del Instituto Nacional Penitenciario (Perú) los casos de delitos de Omisión a la Asistencia Familiar (OAF) se han venido incrementando, en Enero del 2012 habían 553 personas reclusas en Establecimientos Penitenciarios de nuestro país por este delito, pero a finales del mismo año ya eran 638. El último reporte que data de Mayo del 2013, señala que hay 684 internos por este delito, cada vez más”. (Flores, 2014)

Específicamente, “en el Distrito Judicial de Lambayeque existen 92,915 casos por el delito de la omisión a la asistencia familiar, lo cual lo convierte en el ámbito

judicial con el más alto casos de padres irresponsables, según datos de la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Ana Salés del Castillo. La magistrada indicó, que el Distrito Judicial de Lambayeque no solo abarca a las tres provincias de la región Lambayeque, sino también las provincias cajamarquinas de San Ignacio, Jaén y Cutervo y que es una pena que los padres dejen a sus hijos en total desamparo. Salés del Castillo afirma que sólo en los juzgados de las provincias de Lambayeque, Ferreñafe y Chiclayo se están ventilando un total de 8,962 procesos por omisión a la asistencia familiar y recomendó a los padres que estén en un juicio por alimentos, cumplir con las pensiones pues su incumplimiento implica cárcel efectiva”. (La República, 2015)

Ante esta realidad problemática en el campo de la dogmática jurídica y el enfoque social de la importancia de la conversión de la pena privativa de libertad, como sanción que busca el respeto de la dignidad del ser humano, sin que el Estado renuncie al derecho que tiene para penar al infractor, buscando con esto la resocialización sin tener que recluir al sentenciado en un establecimiento penitenciario, que por demás, no cuenta con las mínimas condiciones para lograr el fin perseguido por la pena privativa de la libertad efectiva.

Como especialista legal, actualmente en los Juzgados del nuevo código procesal penal y anteriormente en los juzgados liquidadores penales de esta ciudad, he observado que algunos jueces, tanto del nuevo código, otorgaban hasta en los años 2012, 2013, libertad anticipada; sin embargo, tomando en cuenta la casación de la Corte Suprema (382-2012 - La Libertad), esta medida ya no se aplica, y respecto a los juzgados liquidadores, concedían la conversión de la pena privativa de libertad, específicamente en los delitos de Omisión de Asistencia Familiar, a los sentenciados como una pena suspendida, la cual era revocada a pena efectiva, ello, en virtud a lo dispuesto en el artículo cincuenta y dos del Código Penal. Decisiones, que se vienen tomando con los fines de previsión y resocialización, teniendo en cuenta los efectos estigmatizantes que produce una pena efectiva y cuando el sentenciado, ha cumplido con el pago total de las pensiones alimenticias devengadas y reparación civil impuesta; en otros casos, se ha revocado la pena suspendida ante el incumplimiento de estos pagos impuestos en las sentencias y convertido en penas efectivas,

habiéndoseles dado ingreso al establecimiento penal de Chiclayo. Razón por la cual, se creyó conveniente la presente investigación, formulándose el siguiente problema: ¿En qué medida la prisión efectiva, por efecto de la revocación de la condicionalidad de la pena en los delitos de omisión de asistencia familiar influye en el cumplimiento de los fines de prevención, protección y resocialización de la misma, en el distrito de Lambayeque en el periodo del 2012 al 2014?

Por otro lado, el tipo de investigación del presente estudio es descriptiva, porque describió las características o situaciones de las variables en estudio, tal cual las encontró. Además es analítica documental porque se analizó la situación actual de los reos luego de cumplir su condena y jurídica porque posee un respaldo legal; y con un diseño no experimental retrospectiva.

La población, estuvo conformada por los ingresos de procesos por Omisión de Asistencia Familiar en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque del 2012-2014, que fueron: 384; con una muestra conformada por las revocatorias emitidas por el Art. 59, inciso 03 del Código Penal por el delito de O.A.F. del 2012-2014, siendo un total de 27.

El método de investigación es deductivo porque partió de lo general hacia lo individual e inductivo, porque del análisis individual se llegará a la generalización. Con un diseño de investigación no experimental retrospectiva, porque no se manipularon las variables en estudio y se analizaron datos anteriores. Además, al ser una investigación analítica documental, el procedimiento utilizado es el siguiente:

- Primero se identificarán los casos de revocatorias de los delitos de O.A.F.
- Segundo, se identificarán los ingresos al penal por revocatoria de los delitos de O.A.F.
- Tercero, se identificarán los egresos del penal por revocatoria de los delitos de O.A.F.
- Cuarto, se identificará la incidencia de los egresados del penal en la comisión de delitos

- Y por último, se analizará y determinará si los fines de prevención, protección y resocialización se cumplen en los casos de revocatorias de la pena de los delitos de O.A.F.

Los materiales utilizados son los expedientes, resoluciones y reportes de los casos ingresados entre el 2012 y 2014

Asimismo, las técnicas de recolección de información que se utilizaron en esta investigación fueron el Estudio de Gabinete, pues se analizaron resoluciones y reportes del sistema informático jurídico; y la encuesta, la cual se aplicó a los reos que cumplieron con la condena. Por lo cual, se utilizó como instrumento de recolección de datos la documentación y el fichaje u hoja de trabajo de campo, en el cual se ingresaron los datos y anotaciones respectivas sobre los casos de prisión efectiva por revocatoria en los delitos de O.A.F. en el distrito de Lambayeque entre los períodos 2012-2014; y además el cuestionario, el cual estuvo conformado por un listado de preguntas cerradas que se aplicó a los mismos, de acuerdo a la escala de Likert.

Finalmente, se realizó un análisis estadístico del tipo descriptivo con frecuencias, porcentajes y gráficos, utilizando como herramienta estadística el Programa Microsoft Excel.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Pena

2.1.1. Concepto de Pena:

La pena, en su sentido amplio, “consiste en la sanción impuesta por el Estado a aquellos individuos que atenten contra el ordenamiento jurídico establecido. Su eficacia está determinada a diferentes caracteres que debe ostentar y que, desde el punto de vista jurídico de Carrara, debe ser aflictiva, ejemplar, cierta, pronta, pública y protectora de la integridad moral del reo”. (Vásquez, 2014, p. 14).

El Juez, al emitir sentencia impondrá la pena de acuerdo al delito cometido, pudiendo optar por:

- La reserva del fallo condenatorio
- Imponer una condena condicional
- Imponer la pena privativa de libertad

Sin embargo, “si la pena a imponerle es menor a las establecidas como requisitos obligatorios en las figuras antes mencionadas, el juez puede optar por convertir la pena limitando los derechos del sentenciado”. (Vásquez, 2014, p. 14)

En la reserva del fallo condenatorio, el Juez puede aplicarla cuando la naturaleza, modalidad del hecho punible y personalidad del agente hagan prever que esta medida le impediría cometer un nuevo delito. Esta figura se da:

- Cuando la pena privativa de libertad no es mayor de 03 años.
- Cuando no supere las 90 jornadas de prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres.
- Cuando la pena no supere 02, años de inhabilitación.

Vásquez (2014), afirma que la condena condicional está considerada como el beneficio otorgado por el ministerio de la ley o confiado al arbitrio motivado por los tribunales para suspender la condena del que, delinquiendo por primera vez, no se encuentra en rebeldía y es condenado a pena relativamente leve. Este beneficio se apoya en la dudosa conveniencia de las penas cortas pronto cumplidas pero que presentan el riesgo de la convivencia penitenciaria con delincuentes peligrosos.

La condena condicional es otorgada cuando:

- La condena a imponérsele no supere los 04, años de pena privativa de libertad.
- La naturaleza, modalidad del hecho punible y la personalidad del agente hicieron prever que esta medida le impedirá cometer nuevo delito.
- Plazo de suspensión es de 01 a 03 años.

“La conversión de la pena privativa de libertad, permite que los infractores primarios o de escasa responsabilidad, suplan la pena privativa de libertad efectiva en los casos que no sean posibles la condicionalidad de la pena o la reserva del fallo condenatorio en otra de multa, prestación de servicios de la comunidad o limitación de días libres”. (Vásquez, 2014, p. 16).

Puede ser revocada por el Juez, previo apercibimiento, si el condenado no cumpliera injustificadamente con el pago de la multa o la prestación del servicio asignado o la jornada de limitación de días libres, caso en el cual, el sentenciado, deberá cumplir la pena privativa de libertad fijada en la sentencia, descontándose la pena cumplida con anterioridad conforme a la equivalencia siguiente:

- Un día de multa por cada día de privación de libertad.
- Una jornada de servicios a la comunidad o una de limitación de días libres por cada siete días de pena privativa de libertad.

2.1.2. Fines de La Pena

ART. IX del Título Preliminar

Preventiva

Protectora

Resocializadora

La Pena y sus Fines en la Legislación Peruana

“Los últimos procesos de reforma, tienden precisamente a hacer de la pena un instrumento de resocialización, sin abandonar su aspecto retributivo y preventivo general. En el Código de Ejecución Penal, promulgado por D. Leg. 330 del 06 de marzo de 1985, se dispone que la ejecución de las penas y medidas privativas de libertad tienen por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del internado a la sociedad (arts. I del título preliminar). Mientras que en el nuevo Código penal de 1991, en el artículo IX del Título Preliminar, señala que la pena tiene fines de prevención, protección y resocialización”. (Muñoz y García, 1998, p. 679).

En la práctica, “conduce a un derecho penal en que las personas devienen en objeto de manipulación en las manos de un Estado todopoderoso. Para evitar este grave peligro, no basta contar con un sistema penitenciario organizado con la perfección necesaria. La experiencia de los últimos años en el mundo, demuestra lo contrario. De allí, que en países como Suecia, donde se han realizado serios esfuerzos para aplicar los métodos de tratamiento más avanzados, exista una fuerte corriente dirigida a reforzar un sistema penal, basado en el reconocimiento de la capacidad de culpabilidad y de responsabilidad de las personas”. (Aser, Hirsch y Roxin, 1992, p. 316).

“En el código penal peruano, se determinan los fines de la pena, que deben de cumplirse en diferentes esferas. La prevención será a cargo de Sistemas de Prevención del delito, desde los jóvenes, medidas legislativas y una buena y determinante participación de la Policía

Nacional. En cuanto a la protección está a cargo del Poder Judicial y los Sistemas jurisdiccionales al imponer pena a los infractores y delincuentes que pueden causar algún daño a la sociedad, a parte de la función de "castigo" la pena servirá para proteger a la sociedad de individuos con tendencias delictuosas. En cuanto a la resocialización, estará a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), quienes mediante medidas que ejecute en sus centros penitenciarios, intentar conseguir la resocialización de los internos". (Hurtado, 1997, p. 640).

Medios de resocialización

Medios de resocialización tomadas por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE)

- Trabajo penitenciario

Hurtado, indica que "el trabajo es un derecho y deber del interno, según el código de Ejecución penal, sus condiciones son en lo posible similares al trabajo en libertad. No tiene carácter aflictivo ni es aplicado como medida disciplinaria, ni atenta contra la dignidad del interno". (Hurtado, 1997, p. 640).

El trabajo Penitenciario, está considerado como uno de los elementos fundamentales de Tratamiento del interno, constituye decisivamente en su proceso de resocialización.

El trabajo que realizan los internos procesados, tiene carácter voluntario.

Las normas y directivas emitidas por el INPE regulan la planificación, organización, métodos, horarios, medidas preventivas de ingreso y seguridad del trabajo penitenciario.

Las modalidades de trabajo penitenciario se desarrollan a través de actividades profesionales, técnico, artesanal, productivo, artístico y de servicios auxiliares.

Las actividades que se desarrollan en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional son:

El trabajo penitenciario, es proporcionado por la Administración Penitenciaria, a través de la Implementación de los talleres laborales de los establecimientos penitenciarios en donde se vienen ejecutando pequeños proyectos de inversión.

- Los propios medios del interno o de sus familiares.
- Entidades públicas y/o privadas a través de la administración penitenciaria.

Carpintería, zapatería, tejido a máquina, electrónica, mecánica automotriz, soldadura y forja, sastrería, hidroponía, confecciones, cerámica y telares.

- Talleres

Agricultura, confección de carteras, taller de cosmetología, cornoplastía, filigrama, artesanía, juguetería, serigrafía, talabartería, tejido en yute, cestería, manualidades, lavandería, ad - honorem y otros.

Principales actividades

“En los Establecimientos Penitenciarios a nivel nacional, se promueve la Educación del interno en cumplimiento al Código de Ejecución Penal, para la formación profesional o capacitación ocupacional. El interno analfabeto, participa obligatoriamente en los programas de alfabetización y educación primaria de adultos. Se mantiene el derecho del interno de disponer de libros, periódicos y revistas permitiendo vinculación con el exterior”. (INPE, 2015).

El servicio educativo, se presta a través de Centros de Educación Ocupacional, Primaria y Secundaria de adultos, programas de alfabetización y educación a distancia en concordancia con los dispositivos vigentes en la materia de Educación.

- El interno que no tenga profesión u oficio conocido está obligado al aprendizaje técnico, de acuerdo a la aptitud, interés y vocación.
- La Administración Penitenciaria promueve la educación artística, la formación moral cívica y las prácticas deportivas.
- La Administración Penitenciaria da facilidades al interno para que estudie por correspondencia, radio y/o televisión.

“La Redención de la pena por la educación, es un beneficio Penitenciario que permite reducir el tiempo de pena al interno que desempeña una actividad educativa, bajo el control de la Administración Penitenciaria. Este beneficio, fomenta el interés del interno por la educación, en consecuencia la educación cumple un rol despenalizador dentro de la ejecución Penal”. (Hurtado, 1997, p. 640).

Objetivos de la educación y capacitación penitenciaria, según el Instituto Peruano de Ciencias Penales (1995):

1. Reeducar y capacitar a los internos a través de Cursos y Programas Educativos.
2. Reinsertar a la sociedad a los internos que hayan cumplido y aprobado las acciones educativas para que puedan desempeñarse laboralmente en el Medio Libre.
3. Mejorar las metodologías y técnicas de aprendizaje de los profesores de los Establecimientos Penitenciarios con asesoramiento y apoyo del Ministerio de Educación.
4. Sistematizar y uniformizar todas las acciones educativas que se desarrollan en todos los centros de Educación Ocupacional (CEOS) del país.
5. Gestionar la ampliación de servicios Educativos para los internos de los Establecimientos Penitenciarios dándoles formación Primaria y Secundaria de Adultos.
6. Gestionar y ampliar la creación oficial de CEOS.

- **Educación penitenciaria**

Según apreciaciones de Hurtado (1997), de acuerdo al Código de Ejecución Penal, el interno tiene derecho a alcanzar, mantener o recuperar el bienestar físico y mental. La administración penitenciaria, en este caso el INPE, proveerá lo necesario para el desarrollo de las acciones de prevención, promoción y recuperación de la salud de la población penal.

- **Salud Penitenciaria en el Tratamiento de la Población Penal**

Según el INPE, el área de asistencia social desarrolla acciones necesarias que permiten mantener las relaciones del interno con su familia. Por esa razón su trabajo consiste en:

- Detectar, diagnosticar, investigar y analizar los problemas sociales del binomio interno-familia.
- Intervenir brindando orientación y tratamiento a los problemas sociales del binomio interno-familia, a través de la consejería familiar, planificación, programación y promoción de acciones sociales.
- Promover la restitución, mantenimiento y refuerzo del binomio interno - familia a través de procesos individuales, grupales o familiares.
- Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del binomio interno-familia mediante el desempeño de roles, niveles de autoridad, escala de valores y comunicación.
- Brindar educación social, con la finalidad de prevenir y disminuir los índices de reincidencia en el delito, a través de programas sociales, educativos, recreativos, culturales y otros acorde a las características de cada población penitenciaria.
- Brindar atención asistencial a los hijos menores de 03 años de las internas, a fin de garantizar el normal desarrollo de su personalidad.

- Promover redes de soporte interinstitucional que coadyuven en el tratamiento del binomio interno-familia, así como para canalizar acciones de apoyo al interno de escasos recursos económicos.
- Participar en los equipos multidisciplinarios de los programas de PCT y PROCETSS, de acuerdo a las normas y procedimientos de la política de salud.
- Realizar gestiones, coordinaciones y visitas hospitalarias para la atención de los casos de salud, si la situación así lo amerita.
- Participar conjuntamente con los miembros de los equipos multidisciplinarios en los programas preventivos promocionales.
- Adecuar el quehacer profesional a los diferentes regímenes de vida penitenciaria, mediante estrategias y metodologías de intervención.
- Promover la participación en las terapias grupales con temas específicos.
- Derivar a las diferentes áreas de tratamiento los casos de internos que requieran atención especializada.
- Participar como integrante de las comisiones de trabajo convocadas por la superioridad.
- Integrar la junta de clasificación en los Establecimientos Transitorios de Procesados y en los Establecimientos Penitenciarios.
- Administrar los recursos humanos y materiales e institucionales.
- Desarrollar acciones de tratamiento en las áreas de penas limitativas de derecho, post penitenciaria y sentenciados en el medio libre; a fin de propiciar su reinserción familiar y social.
- Promocionar la labor post penitenciaria para despertar en los distintos sectores sociales su compromiso frente a los liberados.

- Potenciar el sistema de apoyo a los liberados para evitar la reincidencia.
- Coordinar con ONGs, congregaciones religiosas, agentes pastorales e instituciones públicas y privadas la canalización de apoyo para los internos de escasos recursos económicos.
- Gerenciar las decisiones técnico-social y políticas, mediante la planificación y ejecución de normas, directivas, proyectos y convenios.

- Asistencia Social

Asistencia post penitenciaria.

“El Código de Ejecución Penal (D.L. N° 654, artículo 125°) señala que la Asistencia Post Penitenciaria tiene como finalidad apoyar al liberado para su reincorporación a la sociedad. Sus actividades complementan las acciones de tratamiento penitenciario”. (Hurtado, 1997, p. 640).

La Asistencia Post-Penitenciaria a los liberados de los Establecimientos Penitenciarios es asumida por el personal penitenciario en ambientes organizados fuera de los Establecimientos Penitenciarios en las regiones donde se cuenta con la infraestructura adecuada.

En las Direcciones Regionales de Arequipa, Cusco, Puno, Chiclayo, Huancayo, existen oficinas encargadas de atender a los liberados en cada provincia donde existe un Establecimiento Penitenciario.

Finalmente, “el más grave inconveniente que tradicionalmente ha tenido la pena privativa de libertad es la marginación social del delincuente, no solo durante el cumplimiento de la condena sino aun después de haber egresado del Establecimiento Penitenciario. Los efectos nocivos de la ejecución de la pena privativa de libertad, se extienden a los familiares del interno que frecuentemente quedan en una situación grave de desamparo material y moral. El problema del delito también involucra a la víctima y sus familiares”. (Aser, Hirsch y Roxin, 1992, p. 316).

Con la finalidad de resarcir, en la medida de lo posible estos factores negativos que inciden sobre la vida del liberado y de sus familiares, la ciencia penitenciaria aconseja “reforzar los lazos que lo unen a su familia y amistades creando una serie de relaciones para que no se produzca ese aislamiento y apoyarlo para que esté en condiciones de reincorporarse plenamente a la sociedad para el cumplimiento de esta labor se tiene el apoyo de las Juntas Post Penitenciarias que funcionan en las regiones penitenciarias y estarán integradas por un equipo interdisciplinario con participación de diversos representantes de las instituciones sociales”. (Muñoz y García, 1998, p. 679).

2.1.3. Conversión de la Pena

“La conversión de la pena, está prevista en el artículo 52º del Código Penal, la misma que establece, que en los casos que no fuera precedente la condena condicional o reserva del fallo condenatorio, el juez podrá convertir la pena privativa de libertad no mayor de dos años en otra de multa o pena privativa de libertad no mayor de cuatro años en otra prestación de servicios a la comunidad o delimitación de días libres. El artículo 52º, se desprende las condiciones para que pueda proceder la conversión, como son que la pena condenatoria que se impuso no exceda de los cuatro años y que en caso concreto no sea posible aplicar al sentenciado una suspensión de la ejecución de la pena o una reserva de fallo condenatorio”. (Vásquez, 2013, p. 17).

Nuestro Código Penal, para aplicar la conversión, no exige al juez discernir sobre antecedentes y las condiciones personales del condenado, tampoco criterios para decidir la conveniencia a aplicar una pena pecuniaria o de limitación de derechos.

Asimismo, el artículo 52º, determina la equivalencia siguiente:

Un día de privación de libertad por una jornada – multa

Siete días de privación por una jornada de prestación de servicios a la comunidad.

Siete días de privación de libertad por una jornada de limitación de días libres.

2.1.4. Revocación de la Conversión

Figura contemplada en el artículo 53º del C.P., la misma que procede si el condenado no cumpliera injustificadamente con la pena impuesta por conversión (multa, prestación de los servicios asignados, o con las jornadas de días libres), la conversión de otorgada, sería revocada, debiendo entonces ejecutarse la pena prevista de libertad señala en la sentencia.

Esto significa que “el propio sentenciado opta por no cumplir con las reglas establecidas en la ejecución de la pena convertida, lo que facultaría al juez variar su decisión, ya que el condenado demuestra con su accionar que no le interesa el mandato o no considera la decisión del juzgador que trato de evitarle el sufrimiento de estar recluido en un penal, a esta figura en la doctrina se la llama CONVERSION IN MALAM PARTEM” (Vásquez, 2014, p. 17).

Con la conversión de la pena, obliga al condenado por un lado a cumplir adecuadamente con la pena convertida y por otro lado a abstenerse de cometer un nuevo delito, de presentarse este último supuesto el art. 54º de C.P. indica que la revocación es automática si el condenado comete un delito doloso sancionado con pena privativa no menor de tres años, haciéndose hincapié en la nueva sentencia.

Vásquez (2014), sostiene que la revocación procederá si el condenado es requerido por la autoridad judicial, pero esto sería innecesario si el condenado, incurre en la comisión de un nuevo delito doloso cuya pena es de tres años o más de privación de libertad, en esta circunstancia la revocación es automática e inmediata.

Nuestra Legislación Nacional, para el caso de Conversión de Pena, ha tenido la siguiente evolución:

b.1. Constitución Política Del Perú

“Los incisos 21 y 22 del artículo 139°, de la Constitución, enmarcan la obligación del Estado, de garantizar que los centros penitenciarios sean lugares de readaptación social y que el delincuente no sea objeto de venganza ni de violencia de parte de la sociedad por el agravio cometido. Asimismo, al imponerse una sanción penal se deben tener presente los derechos humanos puesto que el delincuente es un ser humano igual que todos nosotros”. (Vásquez, 2014, p. 19)

El artículo 139° establece lo siguiente:

Art. 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

- 21. "El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos adecuados"
- 22. "El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad".

b.2. Exposición de Motivos del Código Penal

“El Código Penal de 1991, en su capítulo referido a conversiones de la Pena Privativa de Libertad establece que el juzgador puede convertir una pena privativa de libertad no mayor de 03 años, en otra que puede ser de multa, prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres (art. 52°), señalando que si el condenado no cumpliera injustificadamente con el pago de la multa o con la prestación de servicio asignado o con las jornadas de limitación de días libres, la conversión procedente deberá ser revocada, debiendo ejecutarse la pena privativa de libertad señalada en la sentencia”. (Becaria, 2000, p. 130).

Asimismo, Becaria (2000) señala que el descuento de la pena no privativa de libertad cumplida con anterioridad a la revocatoria se hará de acuerdo con las equivalencias señaladas en el art. 56° del mismo precepto legal, procediendo la revocación si es que, dentro del plazo de ejecución de la

pena ya convertida, el condenado comete un delito doloso sancionado en la ley con privación de libertad no menor de 03 años, trayendo como consecuencia la revocatoria automática.

b.3. Código Penal de 1991

El proyecto de ley propone la modificación del artículo 52° que a la letra dice:

“Artículo 52°.- En los casos que no fuera procedente la condena condicional o la reserva del fallo condenatorio, el Juez convertirá la pena privativa de Libertad no mayor de un año en otra de multa, prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres, a razón de un día de privación de libertad por un día multa, por una jornada de prestación de servicios a la comunidad o por una jornada de limitación de días libres” (Becaria, 2000, p. 132).

Dentro de las teorías preventivas de la pena se encuentra la prevención general y la prevención especial. La primera actúa antes de la infracción mediante la coacción psicológica anunciando a todos los individuos la sanción a imponerse. La prevención especial, que es el análisis de nuestro tema, pone énfasis en el tratamiento del condenado, procurando su rehabilitación y resocialización.

En este sentido, el Art. IX del Título Preliminar del Código Penal señala taxativamente:

Artículo. IX.- “La pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora. Las medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación”. (Becaria, 2000, p. 132).

Con relación al sistema de penas establecidas en el presente código se señalan los límites de las penas privativas de libertad en el art. 29° que, modificado por el Decreto Ley 25475, establece:

Artículo 29°.- “La Pena Privativa de Libertad tendrá una duración de dos días hasta cadena perpetua”. (Becaria, 2000, p.133).

Cuando se hace referencia, a las penas limitativas de derechos, se establecen que ambas pueden aplicarse como autónomas y sustitutivas pudiendo ser revocadas en caso de que el inculcado incumpla injustificadamente las normas estipuladas para esta figura o si cometiera un nuevo delito.

La finalidad de estas penas alternativas, radica en evitar la aplicación de la pena privativa de libertad, a los autores de hechos que no revisten mayor gravedad como el delito de omisión de asistencia familiar, e impedir que el agente de esa infracción ingrese a un centro penitenciario. Es por esta razón, que se les ha dado a estas figuras un carácter peculiar, diferentes entre ellas mismas para poder reincorporar al sentenciado dentro de la sociedad. Así tenemos que:

La prestación de servicios a la comunidad se cumple fuera del horario y de los días de trabajo en obras públicas o comunitarias, de acuerdo a las habilidades o a la capacidad del sentenciado. El artículo establece lo siguiente:

Artículo 34°.- “La pena de prestación de servicios a la comunidad obliga al condenado a trabajos gratuitos en entidades asistenciales, hospitalarias, escuelas, orfanatos, otras instituciones similares u obras públicas.

Los servicios serán asignados, en lo posible, conforme a las aptitudes del condenado, debiendo cumplirse en jornadas de diez horas semanales, entre los días sábados y domingos, de modo que no se perjudique la jornada normal de su trabajo habitual”. (Becaria, 2000, p. 140).

El condenado puede ser autorizado para prestar estos servicios en los días útiles semanales, computándosele la jornada correspondiente.

Esta pena se extenderá de diez a ciento cincuenta y seis jornadas de servicios semanales.

“La ley establecerá los procedimientos para asignar los lugares y supervisar el desarrollo de la prestación de servicios”. (Vásquez, 2014, p. 22)

Vásquez (2014) afirma que el propósito de incorporar la figura de limitación de días libres da la posibilidad al condenado de realizar el trabajo habitual y permanecer con su familia. La permanencia en el centro de reeducación será sólo obligatoria para los fines de semana o feriados durante el plazo que establezca el Juez en la Sentencia. El artículo señala expresamente:

Artículo 35°.- “la limitación de días libres consiste en la obligación de permanecer los días sábados, domingos y feriados por un mínimo de diez y un máximo de dieciséis horas en total por cada fin de semana, en un establecimiento organizado con fines educativos y sin las características de un centro carcelario”. (Becaria, 2000, p. 140).

“Esta pena se extenderá de diez a ciento cincuenta y seis jornadas de limitación semanales. Durante este tiempo el condenado recibirá orientación tendiente a su rehabilitación. La ley establecerá los procedimientos de supervisión y cumplimiento de la pena”. (Vásquez, 2014, p. 22).

La experiencia en nuestro sistema penal, nos demuestran que en el Perú, la pena siempre ha cumplido una misma función. Es de castigo y autoritarismo, mecanismo deshumanizado y de intimidación social. En nuestro medio, la pena es y ha sido de prevención general negativa, a pesar de que nuestra Constitución, el Código Penal, y el de Ejecución Penal, han tratado de reconocerle una función preventiva especial y de resocialización.

Artículo 59°

“Nuestro Código Penal de 1991, en su artículo 59°, trata sobre los efectos del incumplimiento de las reglas de conducta y establece las sanciones que el operador jurídico (Juez), podrá aplicar según los casos, dentro del plazo o período de prueba, a aquel sentenciado que ha sido condenado a pena privativa de libertad suspendida, y que no cumpla con las reglas de conducta que se le han impuesto en la sentencia o que haya sido condenado por otro delito. Sanciones como la amonestación, la prórroga y la revocatoria de la suspensión de la pena, sanción esta última, que deberá estar sujeta conforme lo estipula el texto del artículo 60 del citado código, a que si durante el plazo de prueba, el agente es condenado por haber cometido nuevo delito doloso, cuya pena privativa de libertad sea superior a tres años, se ejecutará la pena suspendida condicionalmente y la que corresponda por el segundo hecho punible”. (Ocaña, 2009).

Ocaña (2009) manifiesta que la Pena Privativa de Libertad, forma parte de un arsenal punitivo que sigue el Código Penal Peruano y que tiene como una de sus medidas alternativas, la suspensión de su ejecución y que está contenida en el artículo 57°, del código acotado, lo que implica que la misma no se hará efectiva, esto es, que al condenado o condenada, no se le dará ingreso a Centro Penitenciario alguno, sino que al suspenderse su ejecución, quedará en libertad bajo condiciones, debiendo cumplir obligatoriamente con un deber jurídico, las reglas de conducta que se le imponen, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de aplicarse lo dispuesto en el artículo 59 del C.P.

“De las sanciones que establece el Art 59° del C.P. Obviamente la más grave, la más solicitada y menos deseada por los condenados, en ejecución de sentencia, es la Revocatoria de la suspensión de la ejecución de la pena por efectiva, esto es el cambio legal de su libertad condicional por efectiva”. (García, citado por Ocaña, 2009).

La Teoría dista mucho de la práctica, pues en esta última, se suele muchas veces revocar la suspensión de la ejecución de la pena por

efectiva, sin tener como fundamento sustentatorio, unidad o coherencia fáctica y jurídica.

Al sentenciado a pena condicional, es decir bajo condiciones, se le imponen en su mayoría, varias reglas de conducta para que las cumpla, de lo contrario, esa pena condicional se revocará y se hará efectiva.

El juzgador, haciendo uso del IUS PUNIENDI estatal a nombre de la nación, debe precisar e indicar en su sentencia, un apercibimiento o apremio, que será la base legal o jurídica, para la aplicación del artículo 59° y 60° del C.P.

La generalidad, significa la concurrencia de todo, de una totalidad, y la especificidad significa una o dos cosas, las que excluyen a otras, la lógica es la conclusión válida y la coherencia es la relación de una cosa con otra.

“Cuando un Juez sentencia y condena, impone varias reglas de conducta, es decir una pluralidad o generalidad y cuando de su apercibimiento; él mismo, señala que se aplicará en caso de incumplimiento de “las reglas de conducta”. Se entiende esta, que sólo se podrá hacer efectivo el apremio, si en forma concurrente no cumple con todas las reglas impuestas, pues tiene que actuar administrando justicia, conforme a los términos que él mismo ha indicado en su sentencia, pues ha consignado: Las reglas de conducta, que no es una sino todas las impuestas”. (Ocaña, 2009).

Asimismo, Ocaña sostiene que “cuando un Juez sentencia e impone varias reglas de conducta, empero, cuando de su apercibimiento, él mismo, señala que se aplicará en caso de incumplimiento de alguna o cualquiera de las reglas de conducta precisándose así, se entiende esta, que podrá hacerse efectivo el apremio, si no cumple con una o cualquiera de las reglas impuestas, excluyendo o siendo irrelevante si cumplió con las demás, pues tiene que actuar administrando justicia conforme a los términos que él mismo ha resuelto”. (Ocaña, 2009).

Pues siendo así, si se aplica alguna sanción fuera de lo dispuesto claramente en el apercibimiento, el que cobra mayor fuerza una vez consentida o ejecutoriada la sentencia, es notoria su ilegalidad y mala aplicación de la ley penal al caso concreto, teniendo como consecuencia una inadecuada y anulable revocatoria de la suspensión de la pena.

“El artículo 59°, del Código Penal, debe ser aplicado conforme a lo estipulado en su referido texto (principio de legalidad) y conforme a los términos que el propio Juez dictó y que tiene que respetar en señal de coherencia lógica y legal”. (Ocaña, 2009).

Se revoca la suspensión de la pena, cuando se imponen varias reglas de conducta al condenado e incumple una sola, a pesar que el apremio diga claramente; en caso de incumplimiento, es decir de todas ellas, en forma plural, pues no se especifica si es solo por el incumplimiento de una o de cualquiera.

“El apercibimiento debe ser claro, se debe aplicar las sanciones del artículo 59 del Código Penal, conforme se haya precisado en él, si se dice que se aplicarán las sanciones en caso de incumplimiento de una sola regla de conducta o en caso de incumplimiento de todas ellas en forma general, habrá que hacerlo efectivo en ese orden y no tratar de forzar la ley, ni desnaturalizar lo que se ha sentenciado y que ha quedado firme”. (De la Rosa, citado por Ocaña, 2009).

La revocación de la suspensión de la pena, es la sanción más severa que el juez en ejecución de sentencia, puede y debe aplicar en forma excepcional al condenado, previamente aplicando la amonestación y prórroga, sin embargo su utilidad o uso debe tener como límite la comisión por parte del sentenciado de un nuevo delito doloso, mereciéndose por ello otra condena.

2.2. Bien Jurídico

2.2.1. Concepto de Bien Jurídico

Jakobs no participa del concepto clásico de bien jurídico.

“Como se sabe, la pena debe ser entendida como una contradicción de la desautorización de la norma, por lo que la pena no asegura bienes jurídicos, y mucho menos los repara, sino que asegura la vigencia de la norma. La protección de bienes jurídicos no se obtiene directamente, sino tan solo en forma mediata”. (Reyes, 2013).

“Para Jakobs el Derecho penal se legitima formalmente mediante la aprobación conforme a la Constitución de las leyes penales, las que permiten el mantenimiento de la forma de la sociedad y el Estado. Desde este punto de vista, la contribución que realiza el Derecho penal reside justamente en garantizar dichas normas. Esta garantía consiste, señala Jakobs, en que las expectativas imprescindibles para el funcionamiento de la vida social, en la forma dada y en la exigida legalmente, no se den por perdidas en caso de que resulten defraudadas”. (Reyes, 2013). Para ello denomina el autor el bien jurídico-penal que “consiste en proteger la firmeza de las expectativas normativas esenciales frente a la decepción, firmeza frente a las decepciones que tiene el mismo ámbito que la vigencia de la norma puesta en práctica”. (Jakobs, 1997, pág. 45).

Se pregunta Jakobs cuándo un bien es un bien jurídico. Su respuesta es: “cuando esté configurado como derecho del titular. No existen los bienes jurídicos que fluctúen libremente, sin estar asignados a un titular, sino sólo aquellos a cuyo uso tiene derecho un individuo o un colectivo, y no es el bien, sino el titular el que –puesto que tiene derecho- puede exigir que su bien no sea lesionado. Dicho de otro modo: el Derecho no es un muro protector colocado alrededor de los bienes, sino que es una relación entre personas. Por lo tanto, la idea del Derecho penal como protector de bienes jurídicos sólo puede significar que se protege a una persona o a la generalidad, en cuanto colectivo imaginado de todas las personas, en su

relación con otra persona, contra la lesión de los derechos sobre sus bienes”. (Jakobs, Gunter, 1997, Pág. 10).

2.3. Derecho Alimentario

2.3.1. Concepto Jurídico de Alimentos

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, “constituyen alimentos cualquier sustancia que puede ser asimilada por el organismo y usada para mantener sus funciones vitales, caso especial de los seres humanos”. (RAE, 1992).

Sin embargo, “toda persona humana, como sujeto de este derecho esencial, requiere además de subsistir, desarrollarse como tal, para lo cual necesita de otros factores esenciales como: salud, educación, vivienda, recreo, entre otros, y es en razón de ello que en el campo del Derecho se ha elaborado un concepto jurídico con un sentido más amplio, que es recogido por las legislaciones de cada país”. (Reyes, 2013, p. 773).

En el caso del Perú, el artículo 472° del Código Civil, aplicable en forma genérica para adultos, ha sido modificado para los casos de menores por el Código de los Niños y Adolescentes (artículo 101°), con el siguiente texto: “Se considera alimentos lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y recreación del niño o adolescente. También se considera alimentos los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa del post- parto”. (Sevillano y Mendoza, 1994).

Por consiguiente, existe un concepto jurídico de los alimentos, como se comenta en la Enciclopedia Jurídica OMEBA, indicando que “comprende todo aquello que una persona tiene derecho a percibir de otra por ley, declaración judicial o convenio- para atender a su subsistencia, habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción”. (OMEBA, 1986).

“Este criterio está sustentado en la Declaración de los Derechos Humanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño, normas internacionales que el Perú suscribió, convirtiéndolas en ley interna, como se consagra en

el artículo 55o de la Constitución Política (1993) Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”. (Reyes, 2013, p. 774).

En cuanto a la Declaración de los Derechos Humanos, suscrita y proclamada en París el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución No 217 A, y aprobada en el Perú por Resolución Legislativa N° 13282 del 15 de diciembre de 1959, establece en su artículo 03°: “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. El artículo 25°, inciso 01: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad.” Inciso 02°: “La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”. (DDH, 1948).

“En cuanto a la Declaración sobre los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 por Resolución No 1383, suscrita por el Perú el 26 de enero de 1990 y aprobada mediante Resolución Legislativa No 25278 con fecha 03 de agosto del mismo año, ratificada por el señor Presidente de la República con fecha 14 de agosto de 1990, entra en vigencia en el Perú como ley interna con fecha 2 de setiembre del referido año”. (Reyes, 2013, p. 774 y 775).

Este instrumento internacional contiene disposiciones expresas sobre el derecho de alimentos de los niños, sobre la base de los siguientes principios:

Principio 2: “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral

espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental que se atenderá, será el interés superior del niño”.

Principio 4: “El niño debe gozar de los beneficios de la Seguridad Social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberá brindarle tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y post-natal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados”.

En consecuencia, los alimentos constituyen un factor indispensable para la vida, sin los cuales el individuo perecerá indefectiblemente, y en el caso de que no sean suficientes, se verá limitado en su desarrollo integral, físico mental y psicológico, por cuya razón considero que toda omisión en su cumplimiento es un verdadero atentado contra los Derechos Humanos.

2.3.2 Tipificación del Derecho Alimentario

Según nuestro Código Civil peruano (1997), estipula lo siguiente:

Artículo 472.- Noción de alimentos

Se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la situación y posibilidades de la familia.

Cuando el alimentista es menor de edad, los alimentos comprenden también su educación, instrucción y capacitación para el trabajo.(*).

(*) Por medio de la Segunda Disposición Final del Decreto Ley N° 26102, publicado el 29-12-92, se modifica el presente artículo, sin embargo, el referido Decreto Ley no propone el texto modificatorio, manteniéndose por tal motivo el texto original.

Artículo 473.- Alimentos a hijos mayores de edad

“El mayor de dieciocho años sólo tiene derecho a alimentos cuando no se encuentre en aptitud de atender a su subsistencia por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas.

Si la causa que lo redujo a ese estado fue su propia inmoralidad, sólo podrá exigir lo estrictamente necesario para subsistir.

No se aplica lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el alimentista es ascendiente del obligado a prestar alimentos.”

Artículo 474.- Obligación recíproca de alimentos

Se deben alimentos recíprocamente:

- 1.- Los cónyuges.
- 2.- Los ascendientes y descendientes.
- 3.- Los hermanos.(*).

(*) Por medio de la Segunda Disposición Final del Decreto Ley N° 26102, publicado el 29-12-92, se modifica el presente artículo, sin embargo, el referido Decreto Ley no propone el texto modificatorio, manteniéndose por tal motivo el texto original.

Artículo 475.- Prelación de obligados a pasar alimentos

Los alimentos, cuando sean dos o más los obligados a darlos, se prestan en el orden siguiente:

- 1.- Por el cónyuge.
- 2.- Por los descendientes.
- 3.- Por los ascendientes.

4.- Por los hermanos.(*)

(*) Por medio de la Segunda Disposición Final del Decreto Ley N° 26102, publicado el 29-12-92, se modifica el presente artículo, sin embargo, el referido Decreto Ley no propone el texto modificadorio, manteniéndose por tal motivo el texto original.

Artículo 476.- Gradación por orden de sucesión legal

Entre los descendientes y los ascendientes se regula la gradación por el orden en que son llamados a la sucesión legal del alimentista.

Artículo 477.- Prorratio de alimentos

Cuando sean dos o más los obligados a dar los alimentos, se divide entre todos el pago de la pensión en cantidad proporcional a sus respectivas posibilidades. Sin embargo, en caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales, el juez puede obligar a uno solo a que los preste, sin perjuicio de su derecho a repetir de los demás la parte que les corresponda.

Artículo 478.- Parientes obligación a pasar alimentos

Si teniéndose en cuenta las demás obligaciones del cónyuge deudor de los alimentos, no se halla en condiciones de prestarlos sin poner en peligro su propia subsistencia, según su situación, están obligados los parientes antes que el cónyuge.

Artículo 479.- Obligación de alimentos entre ascendientes y descendientes

Entre los ascendientes y los descendientes, la obligación de darse alimentos pasa por causa de pobreza del que debe prestarlos al obligado que le sigue.

“El Código de los Niños y Adolescentes establece de manera especial un orden para cumplir con la prestación alimentaria en ausencia de los padres. Según su Art. 102° “Es obligación de los padres prestar alimentos

a sus hijos. Por ausencia de éstos, prestarán alimentos en el orden siguiente: 1. Los hermanos mayores de edad; 2. Los abuelos; 3. Los parientes colaterales hasta el tercer grado; 4. Otros responsables del niño o adolescente” En este último caso se encuentran los tutores, guardadores y otros”. (Reyes, 2013, p. 783)

Artículo 480.- Obligación con hijo alimentista

La obligación de alimentarse que tiene un padre y su hijo extramatrimonial no reconocido ni declarado, conforme a lo dispuesto en el artículo 415, no se extiende a los descendientes y ascendientes de la línea paterna.

Artículo 481.- Criterios para fijar alimentos

Los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades del que debe darlos, atendiendo además a las circunstancias personales de ambos, especialmente a las obligaciones a que se halle sujeto el deudor.

No es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar los alimentos.

Artículo 482.- Incremento o disminución de alimentos

La pensión alimenticia se incrementa o reduce según el aumento o la disminución que experimenten las necesidades del alimentista y las posibilidades del que debe prestarla. Cuando el monto de la pensión se hubiese fijado en un porcentaje de las remuneraciones del obligado, no es necesario nuevo juicio para reajustarla. Dicho reajuste se produce automáticamente según las variaciones de dichas remuneraciones.

Artículo 483.- Causales de exoneración de alimentos

“El obligado a prestar alimentos puede pedir que se le exonere si disminuyen sus ingresos, de modo que no pueda atenderla sin poner en peligro su propia subsistencia, o si ha desaparecido en el alimentista el estado de necesidad.

Tratándose de hijos menores, a quienes el padre o la madre estuviesen pasando una pensión alimenticia por resolución judicial, esta deja de regir al llegar aquéllos a la mayoría de edad.

Sin embargo, si subsiste el estado de necesidad por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas o el alimentista está siguiendo una profesión u oficio exitosamente, puede pedir que la obligación continúe vigente.”

Artículo 484.- Formas diversas de dar alimentos

El obligado puede pedir que se le permita dar los alimentos en forma diferente del pago de una pensión, cuando motivos especiales justifiquen esta medida.

Artículo 485.- Restricciones al alimentista indigno

El alimentista que sea indigno de suceder o que pueda ser desheredado por el deudor de los alimentos, no puede exigir sino lo estrictamente necesario para subsistir.

Artículo 486.- Extinción de alimentos

La obligación de prestar alimentos se extingue por la muerte del obligado o del alimentista, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 728.

En caso de muerte del alimentista, sus herederos están obligados a pagar los gastos funerarios.

Artículo 487.- Características del derecho alimentario

El derecho de pedir alimentos es intrasmisible, irrenunciable, intransigible e incompensable.

2.4. Omisión

2.4.1. Concepto de Omisión

“Omisión es la abstención de hacer o decir algo. También es una falta, un descuido o una negligencia por parte de alguien encargado de realizar una tarea y que no la realiza. Procede del latín *omissio*, *-ōnis*. Se pueden

considerar como sinónimos de 'omisión' palabras como: olvido, falta, distracción, supresión, descuido y negligencia". (Significado.com, 2013)

En Derecho Penal, omisión es un delito o falta consistente en abstenerse de actuar ante una situación que se considera un deber legal, como la asistencia a menores discapacitados. En este punto se distinguen dos tipos de delitos de omisión: propia e impropia. En los dos casos se trata de un no hacer, pero ese no hacer tiene que ser relevante penalmente, porque hay unas omisiones que no dan lugar al delito y otras que sí.

“Los Delitos de Omisión responden a un principio de solidaridad humana en virtud del cual se responsabiliza a un sujeto que es el que omite, a realizar una determinada prestación dirigida a la salvaguarda de un bien jurídico o a que no impida la producción de un resultado típico estando obligado a ello”. (Collazos-2006).

La conducta humana que sirve de base al tipo penal puede consistir en un hacer o no hacer.

“El concepto de omisión solo se refiere a aquellos comportamientos pasivos que producen consecuencias jurídicas. Por esta razón, no todo comportamiento pasivo consiste en un no hacer equivalente a una omisión en sentido penal, porque para que tuviera relevancia penal es necesario hacer un juicio normativo negativo”. (Collazos, 2006).

Por otra parte, la omisión responde a una norma de mandato o preceptiva, al contrario de lo que ocurre con los delitos de acción, que responden a una norma prohibitiva.

“Por tanto, la Omisión no consiste en un comportamiento pasivo sino en abstenerse de realizar aquel comportamiento que debiera haberse hecho”. (Collazos-2006).

Así, por ejemplo, un médico no cometería delito por omisión en caso de no atender el seguimiento del paciente, la omisión no es que el médico no

haga, lo relevante a efectos penales se produce cuando ese médico evita el cumplimiento de sus obligaciones, es decir, lo que manda la norma.

- Solo serán omisivas aquellas conductas que consistan en no realizar una determinada prestación o que consistan en no evitar la producción del resultado cuando así lo establezca el CP.

- Los delitos de Omisión, suponen la infracción de una norma de mandato o preceptiva a diferencia de los delitos de acción donde lo que se infringe es una norma prohibitiva, o de prohibición.

Así pues, “anteriormente se ha mencionado que la conducta es la base de la norma penal. Sin embargo, una conducta no se concentra únicamente en un actuar, sino también en un dejar de actuar, así la doctrina penal ha definida a la omisión como una modalidad de comportamiento humano que podemos llamar de silencio conativo para el alcance de determinada meta o propósito debidamente anticipada por el agente, o para mantenerse en dicho estado (de silencio) por el motivo que sea pero debiendo y pudiendo actuar”. (Oporto, 2010, p. 4).

Por otra parte, Muñoz Conde, concibe esta modalidad delictual "que no es un simple no hacer nada, sino que hacer una acción que el sujeto está en situación de hacerlo" (Muñoz, citado por Oporto, 2010, p.4).

Así mismo el profesor Bramont Arias Torres “califica a la omisión como aquella conducta que transgrede una norma imperativa, que es castigado por no hacer lo que la norma ordena”. (Bramont, 2008, citado por Oporto, 2010, p.4) “En consecuencia, es de notarse que tras de la ausencia de producción de movimientos, que realiza el sujeto activo, debe concurrir indispensablemente el elemento subjetivo que ha de ser en este caso el Dolo, el mismo que es exteriorizado a través de la omisión del deber de actuar, contraviniendo de esa manera una norma de mandato”. (Oporto, 2010, p. 4).

De acuerdo a Reátegui (2008), “la doctrina nacional configura a la acción como la manifestación más genuina de la proyección del poder humano destinado a transformar una realidad, de lo cual, si no existe una variación material de la realidad, que se traduzca a través de un menoscabo normativo de valor, no se podría imputar a una persona un resultado típico”. (Reátegui, 2008, p. 133) “Aparentemente la concepción de la omisión se encuentra limitada, o mejor aún, no encuentran fundamento frente a la idea conceptual de la acción, pero Villa Stein, dentro de la doctrina nacional, hace una muy acertada definición al respecto señalando que la omisión como tal, es una forma ampliada de modalidad de ejecución, por lo tanto, la omisión debe de situarse dentro del concepto de acción, que su realización ha de tener un desenlace típico, o mejor aún, relevante jurídicamente”. (Villa Stein, 2008, citado por Oporto, 2010, p. 5).

Nuestro ordenamiento jurídico, a través del Código penal de 1991, ha tomado en cuenta esta innovadora figura, tanto en la Parte General, dentro del artículo 13, como en la parte Especial, en distintos tipos que se caracterizan por ser de carácter *clausus*. Tomando en cuenta la norma sustantiva antes citada, reza lo siguiente: “El que omite impedir la realización del hecho punible será sancionado: 1. Si tiene el deber jurídico de impedirlo o si crea un peligro inminente que fuera propio para producirlo. 2.- Si la omisión corresponde a la realización del tipo penal mediante un hacer. La pena del omiso podrá ser atenuada”. (Oporto, 2010, p. 3 y 4).

Cabe mencionar, que el reconocimiento jurídico que otorga el estado a esta figura, mediante el principio de legalidad, pasa a brindar determinadas garantías frente al agente, a fin de frenar la arbitrariedad del *ius punendi* que posee el estado. Siendo esto así es de tomar en cuenta que dicho reconocimiento se ve ligada a los grandes aportes que realiza la doctrina penal, la misma que según al grado de acertación, ha de poseer una aceptación mayoritaria, por lo que es de reconocer que una adecuada interpretación de la doctrina penal ha de brindar grandes

aportes al desarrollo de la moderna política criminal, siendo dicha labor de esencial trascendencia como fuente del Derecho.

2.4.2. Tipos de Omisión

- **Omisión propia u omisión de auxilio**

“En el Código Penal de muchos países, la omisión de auxilio u omisión del deber de socorro es abstenerse a prestar ayuda a quien se encuentra en una situación de peligro manifiesto y grave. También se conoce como omisión propia, ya que el delito cometido es la 'propia' omisión. Este tipo de omisión no ha generado mayores problemas dentro de su concepción, por cuanto, se le conoce como aquella acción, en la que el agente rehúsa y omite cumplir una norma imperativa. Por ejemplo, si una persona ante un accidente de tráfico con víctimas y pudiendo hacerlo, no presta auxilio”. (Significados.com, 2013).

“Nuestra legislación penal ha tomado en cuenta esta idea, plasmándola dentro de la parte especial del Código Penal, en los siguientes artículos: 126, Omisión de socorro y exposición a peligro; 127, Omisión de auxilio o aviso a la autoridad; 149, Omisión de prestación de alimentos; 229, Omisión de deberes de funcionarios públicos; 352, Omisión de resistencia a rebelión, sedición o motín; 377, Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales; 407, Omisión de denuncia; 424, Omisión de ejercicio de la acción penal; 429, Omisión de consignar declaraciones en documentos”. (Oporto, 2010, p. 5).

Elementos del delito de Omisión Propia:

“Si bien es cierto los delitos de omisión pura no ha calado mayores problemas en cuanto a su interpretación y su concepción por parte de la doctrina penal, en cuanto estos guardan estrecha relación y cierto parecido con los delitos de comisión dolosa, pero es necesario tomar en

cuenta los siguientes aspectos que han de constituir la estructura del tipo de delito *in comento*". (Oporto, 2010, p. 5)

- Acción Esperada: Esta parte del tipo esta interrelacionada con la norma preceptiva, o norma de mandato, por cuanto lo señalado por la norma no es cumplida; ante la expectativa de su efectiva realización de parte del ordenamiento jurídico como de la sociedad en común integrante de una sociedad de riesgo. Por lo tanto, se estaría verificando un no hacer por parte del agente en una determinada situación típica, donde las circunstancias ameritan actuar de una forma necesaria que implicaría la evitación de un riesgo productor de peligro. Empero la acción esperada va en una íntima ligazón con el principio de confianza, basada en la división de trabajo, donde cada persona debe de cumplir a cabalidad sus roles,[9] y un rol de toda sociedad es la solidaridad que pueda existir entre los miembros de ésta, así cada persona debe de responder adecuadamente ante cualquier situación que necesite la actuación de la persona.
- Capacidad de Actuación: El sujeto debe de tener la plena capacidad física y psicológica para poder actuar, y cumplir de esa manera lo ordenado por la norma preceptiva. Para ello se requiere la concurrencia de determinadas circunstancias que coadyuven a la realización perfecta de ésta, así como la cercanía temporal y espacial, conocimientos previos, siendo de esa manera la inconcurrencia de los elementos de la capacidad se estaría produciendo un error de tipo que justificaría el comportamiento del agente. Debemos de tener en cuenta, que el deber de actuar se genera en el momento en el que se produce la necesidad de actuar, es decir se genere la situación típica.
- Ausencia de realizar el comportamiento adecuado: Esta parte del tipo objetivo se sitúa en el momento actual de la comisión del hecho, es decir en la situación típica actual, por cuanto el agente no posee la voluntad de poder actuar de la manera prevista, siendo también necesario que concurren el elemento conativo, aunque muchos autores no admitan la concurrencia del mismo, por cuanto

sin la concurrencia del conocimiento ha de desaparecer la responsabilidad

del delito, a causa de un error de tipo. En cuanto no habrá forma de imputabilidad del ilícito si la persona se esforzó por el cumplimiento de la misma, por lo que debe de haber una ausencia *in strictu sensu* de la acción esperada.

- Relación de Causalidad: Este tipo de delitos son agrupados dentro de la clasificación de los delitos de mera actividad, los mismos que representan la puesta en peligro de un bien jurídico. Por lo tanto, la relación de causalidad se ve un tanto relegada por no importar el resultado del hecho, puesto que la consideración de éste toma cabida dentro de la omisión impropia. Entonces, podemos encontrar solo la concurrencia de una acción omitiva, que ha de representar una infracción de un deber de actuar.

- **Omisión impropia o comisión por omisión**

En segundo lugar, “se encuentra situado éste tipo de omisión como variante más extensa y compleja de la misma. Al respecto, ésta ha sido una de las piedras en el zapato dentro de la concepción doctrinaria, por su difícil interpretación y apreciación dentro de los ámbitos penales. Pudiéndose entender ésta figura como una forma mixta de la acción, en tanto, que está integrada por una omisión y una acción, (*in lato sensu*), por lo tanto ésta figura se acoge a los delitos calificados por el resultado, de lo cual el desenlace típico ha de implicar la violación de una norma de prohibición, ya sea esta no matar (art. 106), no robar (art. 188) entre otras. Que para poder encontrarse en el ámbito de la tipicidad es menester poder identificar los dos momentos equiparándolas a través de la comisión y la omisión dentro de un juicio de subsunción adecuado, la misma que ha de concretarse entre el contraste de la premisa mayor, las normas (entre la omisión y la comisión), y la premisa menor, que han de enmarcarse dentro del resultado producido a través de los haceres omisivos y comisivos”. (Oporto, 2010, p. 7)

Al respecto poder decir que “se habla de omisión impropia o de comisión por omisión cuando una persona que tiene una posición de garante de un bien jurídico afectado y, estando obligada de esta forma a realizar determinadas acciones, no las cumple provocando consecuencias negativas. Por ejemplo, un profesional sanitario que, trabajando en una urgencia médica abandona a un paciente sin motivo alguno. Estos delitos de omisión impropia se pueden equiparar a delitos de acción. Por ejemplo, en el caso en que un bebé muere por inanición por no haber sido alimentado por sus padres, éstos pueden ser imputados por delito de homicidio por omisión impropia, ya que se considera que el resultado de la 'no acción' es el mismo que la 'acción' (en este caso, matar)”. (Significados.com, 2013).

Elementos de los delitos de Omisión Impropia:

Respecto a los elementos que podemos identificar sobre los delitos de omisión impropia, Reátegui (2008) enumera los siguientes:

- Situación Típica.- Siendo ésta, aquella circunstancia que describe la norma típica, o como bien la doctrina establece, se puede concebir como aquel supuesto de hecho típico integrante de la norma de mandato; que si bien describe la realidad en la que se encuentra una persona o mejor aún el hecho en sí mismo, debe de estar sujeta frente a determinadas situaciones, que dependiendo de los demás elementos del tipo, que no supriman la descripción típica. Así una persona A, que sufre de alucinaciones que se encuentra premunido de armas para matar a B, lo ataca y termina matándola. Aparentemente estamos ante una situación típica del delito de homicidio simple, así el artículo 106° señala “*e/ que mata a otro*”, pero en el presente caso no existe una adecuada situación típica puesto que el agente es inculpable por sufrir alteraciones en el ámbito de su conciencia. Pero nos encontraríamos ante una efectiva situación típica si no hubiese dicha alteración.

- Poseer capacidad Física para ejercitar la acción mandada.- La capacidad toma distintas concepciones, ante los variados ámbitos del Derecho Peruano, así podemos encontrar una capacidad de goce y ejercicio, dentro de la concepción civilista. Si bien dentro de este ámbito, entra a tomar realce la capacidad de ejercicio, la misma que se manifiesta ante el uso de la capacidad total que posee de la persona, para poder actuar, es decir, un ejercicio pleno de la capacidad motriz, así, no podríamos acusar de la comisión de un delito a un ciego que omitió salvar de morir a una persona. Es menester poder mencionar que las circunstancias en las que se encuentra el omitente, deben ser propicias para poder cumplir con la acción mandada, por lo tanto, existe una ligazón, a nivel personal, en cuanto al ejercicio, como también a nivel externo en cuanto a los factores que intervendrán, no necesariamente con voluntad, dentro de la realización del tipo. No se puede dejar de lado que la capacidad también ha tomado una posición subjetiva, por cuanto, el nivel psicológico de la persona no puede dejarse de lado, por ser ésta determinante dentro de la realización de la persona, por lo cual, una determinada situación debe de exigir una adecuada percepción de la realidad, psicológicamente, caso contrario la capacidad quedaría relegada, y por lo tanto la responsabilidad penal del mismo quedaría exenta.
- Posición de garantía.- La garantía es entendida como aquella acción que asegura y protege contra algún riesgo o necesidad. Tomando en cuenta lo señalado, este punto, como parte integrante del tipo de omisión impropia, implica la delegación de responsabilidad, sobre determinadas situaciones, al agente, es decir cumple una función de garantizar que no exista un aumento de riesgo, ya sea permitido como no permitido, dentro de una determinada situación típica, que conllevara a evitar un menoscabo normativo de valor. Como ya se mencionó, el título de garante ha de ser adquirida, según a la naturaleza del hecho, tanto contractualmente como extracontractualmente sobre el riesgo. Empero, la omisión por parte del garante debe de estar investida

del elemento subjetivo, creyendo necesario que exista un conocimiento previo, por lo que nos encontraríamos ante un binomio subjetivo, que deberán de ser determinaste en la relación de causalidad.

- Relación de Causalidad.- La relación de causalidad es concebida, como bien se conoce, como aquel vínculo estrecho existente entre la acción y el resultado, siendo éste un análisis eminentemente naturalístico, donde el primero ha de ser determinante para la producción del segundo. Dicha relación de causalidad en los delitos de omisión impropia ha de tener un vínculo hipotético, por lo que es necesario equiparar la omisión a nivel de una acción, mediante un análisis virtual, que deberá ser investido por la suposición de ¿si hubiese cumplido con el hacer mandado se hubiese concretado el resultado?, por lo que la posición de garante ha de ser determinante dentro de ésta relación.

Tomando razón de cómo se constituyen los elementos del tipo de omisión es menester para una adecuada administración de justicia poder identificar de manera cierta la responsabilidad penal del agente, en sentido lato, en cuanto una mala adecuación típica han de conllevar una vulneración al principio del debido proceso. Por lo que la tutela efectiva ha de ser el elemento determinante para establecer un Derecho Penal acorde a las sociedades que se anticipe a los hechos antes que velar por ellos.

2.5. Asistencia Familiar

2.5.1. Concepto Jurídico de Asistencia Familiar.

El Código Civil, en su artículo cuatrocientos setenta y dos, señala que la “asistencia familiar está relacionada con el concepto jurídico de los alimentos, entendiéndose como tal, a lo que es indispensable para el sustento, la habitación, vestido asistencia familiar, educación, capacitación para el trabajo, salud, recreación, según la situación y posibilidades de la familia”. (Código Civil, 1991)

Otro concepto de asistencia familiar contempla que: “las relaciones jurídicas creados a partir del matrimonio, adopción, concubinato o simplemente de la paternidad o maternidad, determina la existencia, fidelidad, hasta el llamado débito familiar, lo que implica un deber de asistencia familiar por la persona o personas encargadas de garantizar, de manera natural e inexcusable, el mantenimiento de las condiciones mínimas materiales del sustento y formación de los miembros de su familia”. (Campana, 2013, p. 79)

2.6. Delito de Omisión a la Asistencia Familiar

Este tipo de delito “se configura cuando el autor no cumple con el pago de la prestación alimenticia ordenado por el juez extrapenal. Su sola configuración exige se le imponga la pena prevista en el Código Penal, la misma que asciende a 3 años de pena privativa de libertad”. (Burgos, 2010, p. 1).

Para De la Cruz (2015), en el delito de omisión a la asistencia familiar existen diferentes posturas en cuando al bien jurídico que esta protege. Entre estas, el autor destaca tres posiciones doctrinales:

- La Autoridad

“Un primer sector doctrinal sostiene que mediante la tipificación del delito de incumplimiento de obligación alimenticia el legislador ha pretendido otorgar una especial protección al mismo bien jurídico cuya garantía da lugar a la autoridad, esto es, el correcto funcionamiento de la administración pública. En este sentido señala que lo protegido de manera inmediata con este delito es la obediencia de un mandato judicial, a fin de garantizar el cumplimiento de los pronunciamientos judiciales de contenido económico recaídos en los procedimientos civiles de alimentos, de separación nulidad y divorcio. De este modo el delito de incumplimiento de obligación a la asistencia familiar no sería más que una modalidad de desobediencia grave a la autoridad. Muñoz Conde, citado por Gálvez Villegas y Rojas León, refiere que el legislador ha penalizado la simple desobediencia a la autoridad, configurándose una forma específica de la misma que puede

estimarse lesiva de la administración de justicia por la ineficacia de las resoluciones judiciales que provoca” (Gálvez y Rojas, 2012, citado por De La Cruz, 2015, p. 40 y 41).

Contra esta posición se puede alegar que si bien la conducta típica en el delito de incumplimiento de obligación alimentaria implica, de hecho, una posición a una resolución judicial, es evidente que con este delito no se pretende castigar la desobediencia en si misma considerada con el fin de evitar una lesión al principio de oportunidad.

- La Familia

“Una segunda posición considera que el bien jurídico protegido es la familia como institución, ya que la finalidad del precepto es fortalecer y proteger a la comunidad familiar. En nuestro país, esta parecería ser la posición de nuestro código penal al tipificar los delitos de omisión a la asistencia familiar en el título consagrado específicamente a los delitos contra la familia. Sin embargo, se critica a esta posición que el bien jurídico familia es incompatible con los supuestos de matrimonios ilegales o los divorcios, ya que en tales casos se disuelve el vínculo ya sea por sentencia judicial o por infraccionar la ley civil; sin embargo los deberes de asistencia o de alimentos subsisten, ya no en base a la institución de la familia si no en base al parentesco”. (De La Cruz, 2015, p. 41).

Por su parte “César Nakazaki, señala: que los títulos son los que nominan el bien jurídico protegido por el universo típico que forman los capítulos, por lo tanto El Título III del Libro Segundo del Código Penal Peruano ha determinado a la Familia como el bien jurídico tutelado por las figuras típicas que forman el capítulo IV, y, concretamente, por el supuesto típico de incumplimiento de la obligación alimentaria” (Nakasaki, 2007, citado por De La Cruz, 2015, p. 42).

- Deber de Solidaridad

“Una tercera posición considera que el bien jurídico protegido en este delito es el deber de solidaridad que, en el plano jurídico se convierte en el deber de asistencia familiar que se concreta en proveer lo

indispensable para que los sujetos pasivos, puedan desarrollarse plenamente en la sociedad. En este señala que el interés jurídico protegido es la vocación alimentaria que la ley reconoce a favor de quienes están ligados al sujeto activo por un vínculo jurídico familiar o parental”. (De La Cruz, 2015, p. 42).

Bajo esta misma perspectiva “un sector doctrinal precisa que el bien jurídico protegido es la seguridad proveniente de la expectativa de cumplimiento por aquellos a quienes incumben los deberes asistenciales”. (Gálvez y Rojas, 2012, citado por De La Cruz, 2015, p. 42).

A partir del sistema del Código Penal “pereciere que el bien jurídico que se protege es la familia, el delito de Omisión a la asistencia familiar tiene su idea fundamental en la noción de seguridad de los integrantes de la familia, de allí que este delito supone la infracción de los deberes de orden asistencial. Este autor agrega que si el delito en comento supone la infracción de los deberes de orden asistencial en el ámbito familiar, pueden afirmarse entonces que los que se protegen penalmente no son dichos deberes si no los derechos que subyacen ante dichos deberes”. (Reyna, 2011, citado por De La Cruz, 2015, p. 42).

“Normalmente se piensa que el bien jurídico protegido en el ilícito penal de omisión a la asistencia familiar protege a la familia. Creencia que el autor considera discutible agregando que en muchos casos, antes que la conducta del agente se torne en delictiva la familia está seriamente lesionada cuando no disuelta. Situación que no corresponde resolver al derecho penal. En efecto, el bien jurídico que se pretende titular en este delito es el deber de asistencia familiar, auxilio o socorro que tiene los componentes de una familia entre sí. Aquel deber se entiende con la obligación que se tiene que cumplir con los requerimientos económicos que sirvan para satisfacer las necesidades básicas de supervivencia de determinados miembros de su familia” (Salinas, 2012, citado por De La Cruz, 2015, p. 43).

2.6.1. Clases de Delito de Omisión a la Asistencia Familiar

- Delito de Resultado

“Inicialmente la punibilidad del delito de abandono familiar se condicionaba a la producción de un daño determinado, es decir que la mujer o los hijos del culpable queden en situación de miseria, perjuicios en la salud, etc. El código penal polaco inicialmente exigía que el abandonado quede en la miseria o en situación de tener que recurrir al auxilio de subsidios ajenos, en el código penal alemán se tenía que recurrir al auxilio de un tercero, el código penal canadiense exigía que haya caído en la miseria. Este sistema intenta justificar que constituye una precaución necesaria pues la instrucción del derecho penal en la familia era por si misma anormal y ha de considerarse como un atentado a la libertad de la familia. Actualmente el resultado dañoso se estima en ciertas legislaciones, como la nuestra, como causa de agravación del delito”. (Cuello, 1942, citado por De La Cruz, 2015, p. 43).

- Delito de peligro

“En otras legislaciones como la del código penal rumano, la ley austriaca entre otras, este delito se trataba de un delito de peligro exigiendo tan solo que el abandonado pueda quedar expuesto a la miseria, física o moral. Siendo esta la más justa configuración del delito, lo que implica que no ha de esperarse que la situación miserable llegue a producirse para que la infracción se realice; la ley debe evitar que sobrevenga el estado miserable y para ello ha de castigar el mero peligro de su producción”. (De La Cruz, 2015, p.44).

2.6.2. Tipificación del Delito de Omisión a la Asistencia Familiar

El delito de Omisión a la Asistencia Familiar, en el Perú, se regula con la Ley N°. 13906 del 24 de marzo de 1962, bajo el título de Ley de Abandono de Familia, actualmente derogada. “Desde aquella ocasión adopta una posición ecléctica, ubicada entre la posición ampliada, cuyos exponentes fueron la legislación Española y la Italiana, al comprender los deberes que

provenían de la familia, tanto materiales como morales, correspondiendo al ámbito susceptible de incriminación; es la posición restringida, representada por la legislación Francesa, que limita los intereses a los deberes materiales”. (Ruiz, 2010, p. 6).

Código Penal Vigente

Como se ha indicado en forma precedente este delito se encuentra tipificado en el artículo 149, del Código Penal vigente y está estructurado en tres párrafos, que se expone a continuación:

A.- Párrafo Primero: “El que omite cumplir la obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de tres años, o con prestación de servicios a la comunidad de veinte a cincuenta jornales, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial”; a este respecto se puede mencionar que la Corte Suprema de la República, en su ejecutoria del 12 de enero del año 1988 (Expediente N° 7304-97) dice: “Que el comportamiento del sujeto activo en este tipo de delito, consiste en omitir el cumplimiento de la prestación de alimentos establecida en una Resolución Judicial, siendo un delito de Omisión Propia, donde la norma de mandato consiste en una obligación que pesa sobre el sujeto activo de cumplir con sus deberes legales de asistencia”. Es así que conociendo su deber jurídico, se le requiere mediante resolución judicial, para que cumpla con la obligación del pago alimentario y no obstante ello persiste en su incumplimiento; por lo que, se penaliza su conducta omisiva ante la resistencia a la autoridad judicial, en aplicación al artículo trescientos sesenta y ocho del Código Penal.

En este injusto penal, no es permitido el pago parcial del deber jurídico, que corresponde al pago alimentario por parte del agente; para que quede sin efecto dicho pago, debe ser total, de lo contrario, procede la acción penal por omisión al deber impuesto no cumplido; “como señala Tapia Vives “Si se permite el pago parcial o tardío de la obligación alimentaria,

se debilitaría en gran medida la pretensión de prevención general positiva inminente que se intenta conseguir a través de la pena”. (Tapia, citado por Campana, 2013, p. 83)

B.- Párrafo Segundo: “Si el agente ha simulado otra obligación de alimentos en convivencia con otra persona o renuncia o abandona maliciosamente su trabajo, la pena no será menor de uno ni mayor de cuatro años”.

Las conductas típicas en este párrafo son: simulación de obligaciones de alimentos, renuncia maliciosa, y abandono malicioso del trabajo.

“En este supuesto, de falsedad o engaño, tanto el agente como el cómplice tienen responsabilidad penal, siendo común también que el obligado se presente como una persona incapaz de satisfacer su propia obligación alimentaria y así poder sustraerse de la misma. Es un hecho conocido, por toda la existencia de un alto porcentaje de procesos sobre este delito”. (Ruiz, 2010, p. 7-8)

C.- Párrafo Tercero: “Si resulta lesión grave o muerte y estas pudieran ser previstas, la pena no será menor de dos años ni mayor de cuatro, en caso de lesiones graves, y no menor de tres ni mayor de seis en caso de muerte”.

“Lo antes expuesto, constituyen agravantes que corresponden al primero y segundo párrafo del artículo 149° del Código Penal. Este párrafo es bastante polémico porque en la realidad social es frecuente el abandono de los hijos por parte de los padres y familiares; sin embargo, a la sede judicial no acuden todos los casos”. (Ruiz, 2010, p. 8)

El delito de Omisión a la Asistencia Familiar, según Ruiz (2010), dura mientras persista el deber a la asistencia familiar y por ello se dice que es un delito permanente, sólo deja de serlo si se cumple en forma total el deber jurídico impuesto, en consecuencia tiene las siguientes características, como son:

a.- **Sujeto Activo.**- Del delito de omisión a la asistencia familiar es el agente que no cumple, siendo su deber jurídico cumplir la prestación económica, previamente establecida por resolución judicial en sede civil.

b.- **Sujeto Pasivo.**- Es la persona quién sufre las consecuencias del ilícito penal de omisión a la asistencia familiar,

c.- **Delito Permanente.**- Debido a que cuando la acción delictiva misma permite por sus propias características que se pueda prolongar en el tiempo, de modo que sea idénticamente violatorio del derecho, en cada uno de sus momentos, entonces todos los momentos de su duración puede imputarse como de consumación.

d.- **Delito de Peligro.**- La responsabilidad penal conlleva la idea de peligro, la resolución judicial impuesta en sede civil, reestablece el equilibrio, obligando el cumplimiento del derecho alimentario y de esta manera el daño ocasionado al bien jurídico que es la familia, es reparado mediante la asistencia familiar por los conceptos de alimentos, salud, vivienda, educación, recreación y con ello el peligro contra la familia y su seguridad jurídica se reestablece.

El Código Penal Vigente, en su artículo 149, centra el injusto en el abandono económico y requiere de un derecho de alimentos reconocido judicialmente, vale decir, es un reclamo de naturaleza patrimonial. El profesor Santiago Mir Puig, sostiene: “No todo bien jurídico requiere tutela penal, sólo a partir de la concurrencia de suficiente importancia material y de necesidad de protección por el derecho penal, puede un determinado interés social, obtener la calificación de bien Jurídico Penal”. (Mir, 2011, p. 159)

“En el literal c) del artículo 02, inciso 24° de la Constitución Política del Estado Peruano, señala que: “No hay prisión por deudas”; lo que significaría, nos dice el doctor Bramont Arias y otros, que supondría que el artículo 149° del Código penal, resultaría inconstitucional”. (Ruiz, 2010, p. 5). Sin embargo, en el Art. de la

Constitución Política existe una salvedad: “Este principio no limita el mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios”.

De igual forma este planteamiento es desbaratado por Bernel del Castillo Jesús, en su obra El Delito de Pago de Pensiones, al sustentar que “la criminalización de la Omisión a la Asistencia Familiar, se da a partir de la presencia de un bien jurídico de gran relevancia, como es la familia, que debe ser protegido por el orden público, porque su asistencia familiar, depende del pago alimentario por conceptos de alimentos, vestido, vivienda, salud, educación, capacitación para el trabajo, recreación, es decir, está relacionada con los elementos básicos de supervivencia y siendo la familia el elemento más trascendente del Estado, entonces existen fundamentos sólidos para desbaratar cualquier duda que exista, sobre la intervención punitiva en la represión de tal conducta; más aún, si el mismo artículo 06°, del Texto Constitucional, establece que es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos”. (Ruiz, 2010, p. 5)

Así mismo, según Bramont Arias, Bramont Arias Torres, García Contezano, “el bien jurídico que se protege es la Familia. Por ello, el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, tiene su idea fundamental en la noción de seguridad de los integrantes de la familia, de ahí que el delito que se comete, supone la infracción a los deberes de orden asistencial”. (Reyna, 2010, p. 26)

“El comportamiento en el ilícito instruido consiste en omitir el cumplimiento de la obligación establecida por una Resolución Judicial. “Es decir, basta con dejar de cumplir la obligación para realizar el tipo y especialmente los deberes de tipo asistencial”. (Ruiz, 2010, p. 6)

2.6.3. Contexto Actual en delitos de OAF

“El reconocido abogado César Nakazaki Servigón, participó en el II Pleno Jurisdiccional Supremo Extraordinario en materia penal y procesal penal, celebrado el 21 de enero de 2016. En el evento sostuvo que, ante la gran

cantidad de procesos inmediatos por omisión a la asistencia familiar, era imperioso saber si en sede penal se debe demostrar la capacidad económica del obligado a pasar alimentos (dilema frente al cual se muestra a favor de la probanza). Criticó que los procesos por omisión a la asistencia familiar se hayan vuelto, en la práctica, procesos de desobediencia a la autoridad”. (Legis.pe, 2016).

2.6.4. Contexto Actual de Revocatoria y Conversión de Pena en delitos de OAF

Ejecutoria Suprema Actual

Oficio Circular N° 055-2014-P-CSJPI/PJ Del 13 de mayo de 2014

“Sentencia de Casación del 17 de Octubre de 2013, recaída en el Recurso de Casación N° 382-2012, seguido contra Carlos Raúl Arroyo Guevara por el delito contra la familia – omisión a la asistencia familiar en agravio de Cintia Nicole Arroyo Nieve; comunicando que todas las Cortes Superiores de los Distritos Judiciales que aplican el Código Procesal Penal, consideren ineludiblemente como doctrina jurisprudencial vinculante lo señalado en el Cuarto considerando (Del Motivo Casacional; para el Desarrollo de Doctrina Jurisprudencial) de la presente Ejecutoria Suprema, de conformidad con el inciso cuatro, del artículo cuatrocientos veintisiete del Código Procesal Penal”. (CSJP, 2014).

“Del motivo casacional. Para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial Cuarto. El objeto de análisis para esta Sala Suprema es la necesidad de desarrollo de la doctrina jurisprudencial respecto a la libertad anticipada y la conversión de la pena. Si la primera es un mecanismo procesal previsto en la ley para solicitar una conversión de pena en la etapa de ejecución de sentencia.

A. Sobre la conversión de la pena

1. El Código Penal vigente ha considerado cinco modalidades alternativas a la prisión efectiva que son las siguientes: a) sustitución de pena privativa de libertad; b) conversión de pena

privativa de libertad; c) suspensión de la ejecución de la pena; d) reserva del fallo condenatorio; e) exención de pena. De las cuales la que tiene mayor aplicación es la suspensión de la ejecución de la pena y en menor grado la reserva del fallo condenatorio, y en un porcentaje casi nulo las demás medidas alternativas.

2. “El instituto penal de la conversión de pena puede ser definido como la conmutación de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia, por una sanción de distinta naturaleza. En el caso del Derecho Penal peruano, la posibilidades de conversión de la pena privativa de libertad son dos: conversión en penas de multa o conversión en pena limitativas de derechos de prestación de servicios a la comunidad o de limitación de días libres” (Víctor Roberto Prado Saldarriaga. Código Penal. Estudios Preliminares referentes al Código Penal. Editorial Asociación Peruana de Ciencias Jurídicas y Conciliación, página treinta y dos).

3. Para que proceda esta medida alternativa se exige las siguientes condiciones: i) que la pena impuesta en la sentencia condenatoria no exceda de dos o cuatro años de pena privativa de libertad; y, ii) que, en el caso concreto, como requisito especial exige que no sea posible aplicar al sentenciado una suspensión de la ejecución de la pena o una reserva del fallo condenatorio.

4. El artículo cincuenta y dos del Código Penal es el marco normativo en el cual reposa la conversión de la pena privativa de libertad, precisando dicha norma que en los casos que no fuera procedente la condena condicional o la reserva del fallo condenatorio, el juez podrá convertir la pena privativa de libertad no mayor de dos años en otra de multa, o la pena privativa de libertad no mayor de cuatro años en otra de prestación de servicios a la comunidad, o limitación de días libres, a razón de un día de privación de libertad por día de multa, siete días de privación de libertad por una jornada de prestación de servicios a la comunidad o por una jornada de limitación de días libres.

5. Literalmente la norma señala: “En los casos que no fuera procedente la condena condicional o la reserva del fallo condenatorio el juez podrá convertir la pena (...)”. Además, que los tipos de pena sustituidos en la conversión de la pena son: prestación de servicios a la comunidad, limitación de días libres y multa. 6. Los artículos cincuenta y tres y cincuenta y cuatro del Código Penal contemplan como causales de revocación de la pena, que el condenado no cumpla en forma injustificada con el pago de multa o de prestación de servicio o con la jornada de limitación de días-libres, lo cual se diferencia de las penas suspendidas o reserva del fallo, que señalan un serie de reglas de conductas impuesta por el juez en la sentencia.

B. El momento de la conversión de la pena

1. El artículo cuarenta y seis del Código Penal señala que para determinar la pena dentro de los límites fijados por la ley, el juez atenderá a la responsabilidad y gravedad del hecho punible cometido, en cuanto no sean específicamente constitutivas del hecho punible o modificativas de la responsabilidad, considerando las circunstancias genéricas señaladas en el artículo invocado. A su vez, el último párrafo del artículo cuarenta y siete del Código Penal establece que la pena correspondiente al hecho punible es la de multa o limitativas de derechos, la detención se computará a razón de dos días de dichas penas por cada día de detención. Queda claro, entonces, que es de asumir que en la sentencia se deberá fundamentar la razón de la pena a imponer o pena sustitutiva elegida, ya que esta última resulta una medida alternativa de carácter subsidiaria frente a las otras penas que regula el Código Penal.

2. En efecto, si en un proceso penal se determinó la responsabilidad penal de una persona respecto al delito cometido, siendo condenado a pena privativa de libertad suspendida bajo ciertas reglas de conductas, resulta imperativo que esta deba ser

cumplida en el plazo y modo señalado en la ley; toda vez que la conversión de pena es una alternativa que establece el Código Penal frente a la imposición de una pena efectiva de corta duración y de descarte de la suspensión de la ejecución de la pena o reserva del fallo condenatorio. Entonces, se tiene que por expresa disposición normativa la conversión de pena se efectúa al momento de emitirse sentencia; toda vez que opera residualmente, es decir, cuando no procede la condena condicional o reserva del fallo, y como estas se determinan al emitirse sentencia, la conversión de pena por otra alternativa se realizará al momento de emitirse sentencia.

3. El inciso dos del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política del Estado, señala que ninguna autoridad puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución, lo cual implica que la sentencia se cumpla en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa, tampoco se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, tal como lo establece el artículo cuarto del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

4. Existe una duda válida, que tiene trascendentes efectos prácticos, en torno al momento de aplicación del instituto de conversión de pena. Al respecto, existen dos posturas que sintetizan el estado actual. Una primera postura considera que la medida alternativa de conversión de pena solamente opera durante la expedición de la sentencia, la emisión de la sentencia es realizada a través de un pronunciamiento jurisdiccional. El efecto principal de optar por esta postura es que no pueda ser ejercida nuevamente con la finalidad de desnaturalizar los otros sustitutos

alternativos de la pena. Una segunda postura considera que opera también en la fase de ejecución de sentencia. Esta postura señala que apelando a una interpretación sistemática de “todo el capítulo de la conversión de la pena”, lleva a la otra conclusión también jurídica válida y justa, de que su aplicación puede hacerse en fase de ejecución de sentencia; toda vez que el Código Penal no ha contemplado en forma expresa la conversión de penas en la etapa de ejecución, sin embargo, tampoco está prohibida.

5. Desde nuestra perspectiva, la solución al problema se halla en diferenciar las medidas alternativas adoptadas por el Código Penal al momento de su aplicación, lo cual determinará sus efectos durante la fase de ejecución de sentencia. En efecto, al momento de emitir sentencia, el juez valora las circunstancias genéricas que prevén los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis del Código Penal, para imponer una medida drástica que es la prisión efectiva, momento en el cual si descarta la condena condicional o la reserva del fallo condenatoria, convencido que la pena concreta a imponer debe ser efectiva, revalorará el pronunciamiento, y optará por las medidas alternativas, esto es, multa, prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres.

6. De lo mencionado, es evidente que la actividad realizada para la conversión de pena por el magistrado está referida al momento de la determinación judicial de la pena concreta, ya que en ese momento realiza una actividad estrictamente jurisdiccional y porque en el fallo debe fijarse la pena impuesta y a continuación debe acordarse la conversión. Sostener que se pueda realizar en un momento posterior, implicará que se alteraría la autoridad de cosa juzgada, ya que se emitiría pronunciamiento sobre circunstancias no conocidas al momento que se determinó la pena concreta.

7. Esta interpretación se ampara en que la conversión de pena es una institución con presupuestos y requisitos preestablecidos

porque una de sus funciones es evitar que una persona ingrese a prisión, no sacarla de prisión.

8. Sobre las consideraciones precedentes, se concluye que la conversión de pena opera al momento de la emisión de la sentencia. La razón radica en el tipo de valoración que hace el juez al momento de la determinación judicial de la pena concreta, puesto que al emitir el fallo valora la personalidad del agente y las circunstancias que rodean al hecho punible, para luego de un proceso intelectual, declarar si procede o no la conversión de pena.

C. La libertad anticipada

1. La libertad anticipada significa, que el sentenciado a pena privativa de libertad efectiva accede a su libertad antes del cumplimiento de la pena. El inciso tres del artículo cuatrocientos noventa y uno del Código Procesal Penal, establece la figura de la libertad anticipada señalando: “Los incidentes relativos a la libertad anticipada, fuera de los beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional y de la medida de seguridad privativa de libertad, y aquellos en los cuales, por su importancia, el Juez de la Investigación Preparatoria lo estime necesario, serán resueltos en una audiencia oral, citando a los órganos de prueba que deben informar durante el debate”. La misma norma en comento, invoca la figura de la libertad anticipada como una institución cuyo cauce procedimental se realizará vía incidental y, de otro lado, la distingue de los beneficios penitenciarios.

2. En efecto, no se advierte de la norma procesal los supuestos o causales que habiliten la aplicación de la libertad anticipada, no se encuentran establecidos en el Código Penal, en su Capítulo III, donde regulan los casos de conversión de la pena privativa de libertad, el Capítulo IV hace lo mismo respecto a la suspensión de la ejecución de la pena y el Capítulo V destina sus preceptos al desarrollo de la reserva del fallo condenatorio; del mismo modo, el Título V, del Libro I, del Código sustantivo regula todo lo

concerniente a la extinción de la acción penal y de la pena; tampoco alude dicha figura procesal el Código de Ejecución Penal donde establece la operatividad de los beneficios penitenciarios; por consiguiente, la libertad anticipada siendo una figura jurídica de carácter procesal no está regulada en ninguno de los Códigos anteriormente señalados.

3. El artículo cuatrocientos noventa y uno del Código Procesal Penal en sus respectivos incisos, lo que está haciendo es enumerar las respectivas incidencias [conversión y revocación de la conversión de penas, revocación de la suspensión de la ejecución de la pena y de la reserva del fallo condenatorio, y a la extinción o vencimiento de la pena] que modifican una sentencia en ejecución. Por ello, cuando la norma procesal hace la distinción entre libertad anticipada y beneficios penitenciarios, es una de género a especie, donde la libertad anticipada no es otra cosa que la consecuencia o efecto de la aplicación de un beneficio de semilibertad o liberación condicional.

4. Este criterio es el que sigue el Tribunal Constitucional en el expediente número doce guión dos mil diez-PI/TC [considerando noventa y dos], señalando que: “El único momento en que es posible verificar el grado de resocialización del penado, es cuando se presente la solicitud de aplicación del beneficio que genera libertad anticipada. De ahí que la ley penitenciaria aplicable es la que se encuentra vigente en la fecha en que se solicita el beneficio”. De ahí que aplicar dicha institución de naturaleza procesal solo citada en la norma procesal, desnaturaliza el procedimiento de ejecución de sentencia y con ello instituciones procesales como la conversión de las penas, reserva del fallo condenatorio, suspensión de la pena privativa de libertad y los beneficios penitenciarios, que se encuentran desarrolladas en nuestro ordenamiento jurídico vigente.

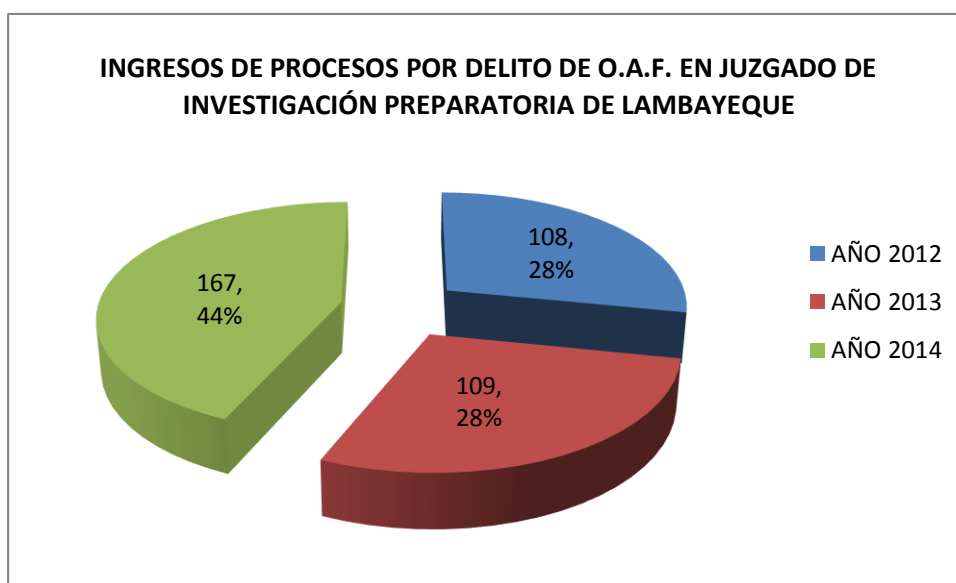
5. En tal sentido, el desarrollo de la libertad anticipada debe ser realizada por el Poder Legislativo, deviniendo en irregular su aplicación vía interpretación extensiva del artículo cuatrocientos noventa y uno, inciso tercero, del Código Procesal Penal, en tanto no exista regulación específica y motivada con fundamentos constitucionales al respecto, para no colisionar con los principios de legalidad, cosa juzgada y tutela jurisdiccional efectiva.

6. En la Casación número ciento ochenta y nueve guión dos mil once, se estableció que: “(...) al no estar reglada la libertad anticipada en nuestro ordenamiento jurídico procesal, existe impedimento normativo para que el juez la otorgue; por tanto, si bien existe la necesidad de desarrollar repuestas jurídicas a los casos de petición de libertad anticipada, consideramos que ello debe ser realizado por el Poder Legislativo, por lo que no procede su aplicación en tanto no exista regulación específica motivada con fundamentos constitucionales al respecto, que no colisionen con los derechos constitucionales, referidos al principio de legalidad, de cosa juzgada y tutela jurisdiccional efectiva, previstos en el artículo dos, acápite veinticuatro, inciso d), artículo ciento treinta y nueve, inciso dos y tres de la Constitución Política del Estado, respectivamente”; por consiguiente, no se puede pretender distinguir ahí donde la ley no distingue”. (CSJ-SPP, 2013, p. 10-18)

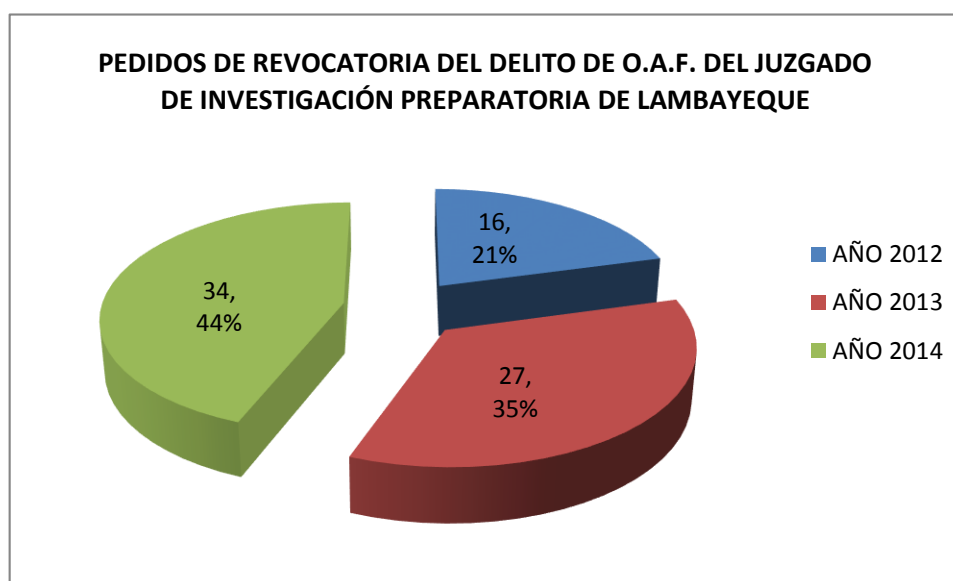
CAPÍTULO III

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE O LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS

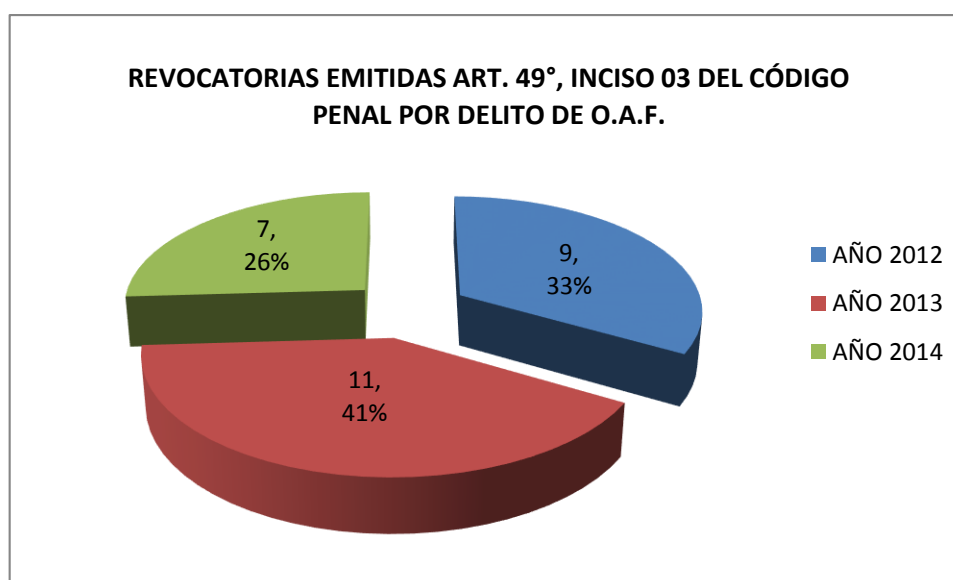
Para la obtención de resultados, se ha indagado en los registros del Sistema Informático Jurídico, y se aplicado un cuestionario a los 27 casos de revocatoria; los cuales se muestran a continuación, y respondiendo a los objetivos específicos planteados.



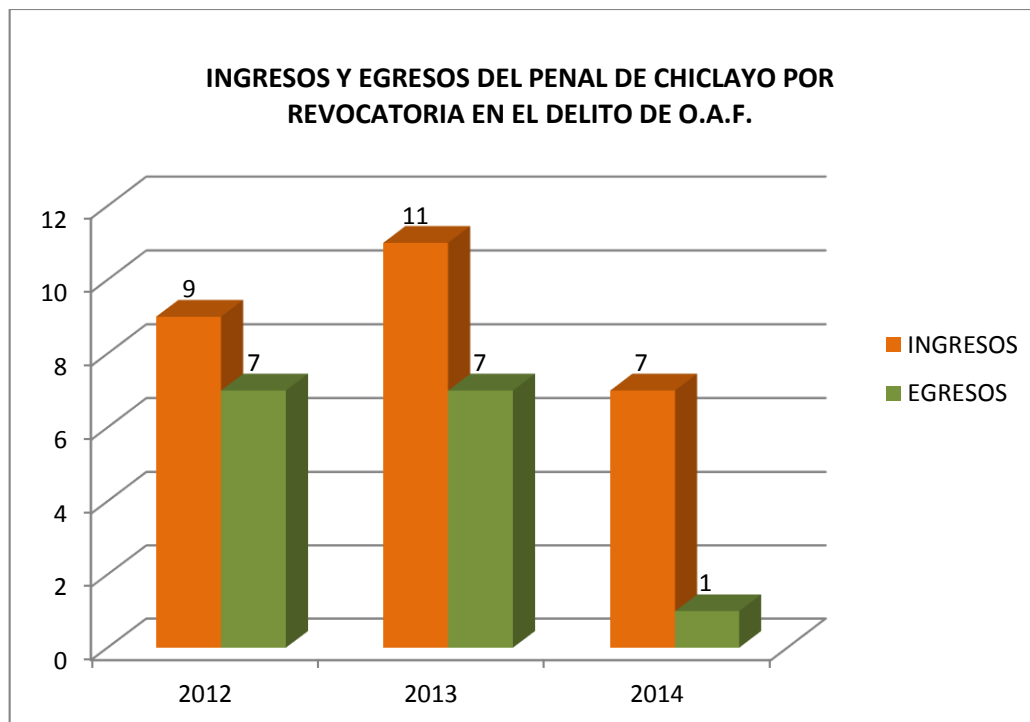
Respondiendo al primer objetivo específico planteado en la presente investigación, se identificaron, como los casos ingresados por el delito de O.A.F. en el Juzgado de Investigación Preparatoria del distrito de Lambayeque; en los cuales se arrojó que en el año 2012, ingresaron 167 (44%); en el año 2013, 108 casos, representando el 28%; y en el 2014, 109 casos (28%); manteniéndose el promedio en estos dos últimos años.



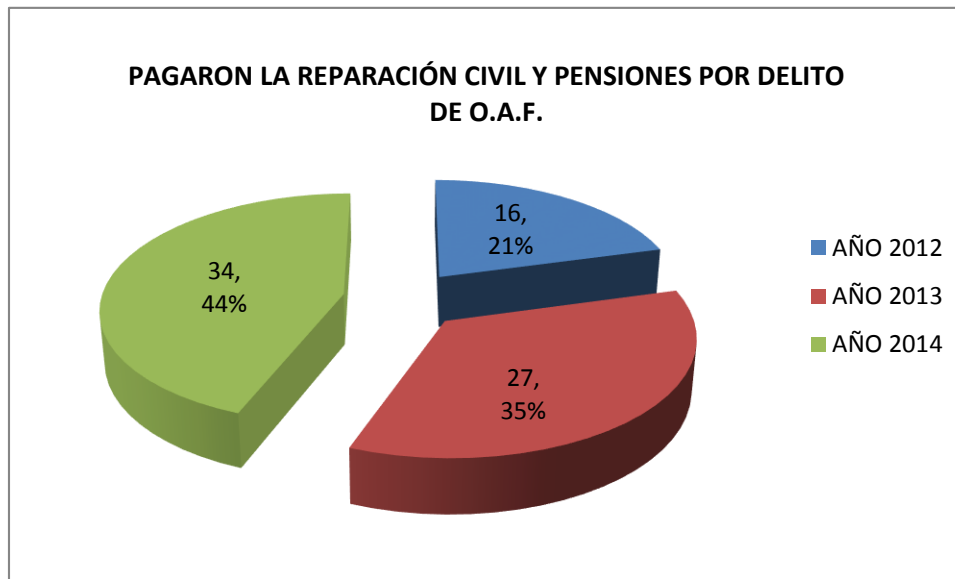
No obstante, en cuanto a los pedidos de revocatoria por el delito de O.A.F., solo se encontró un registro de 34 casos en el año 2012 (44%); 27 en el 2013 (35%); y 16 en el 2014 (21%).



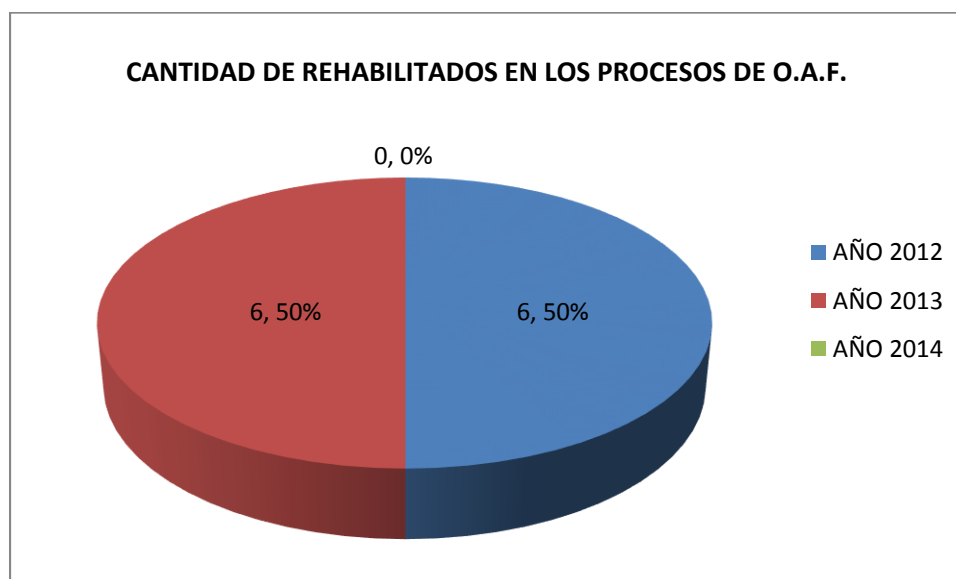
Así mismo, respondiendo al logro del segundo objetivo planteado en la investigación, se identificaron los casos específicos de revocatorias por el delito de O.A.F., encontrándose que en el año 2012 se dieron 9 ingresos al penal; en el 2013, 11 ingresos; y en el 2014, 7 ingresos; siendo un total de 27 internos.



De igual forma, en cuanto al tercer objetivo delimitado en el estudio, se encontró que de los 9 ingresos al penal por revocatoria del delito de O.A.F. en el año 2012, solo 7 lograron egresar; al igual que en el caso de los 11 ingresos del año 2013; mientras que en el 2014, tan solo se registró un egreso del penal, debido a que la gran mayoría aún sigue cumpliendo su condena.

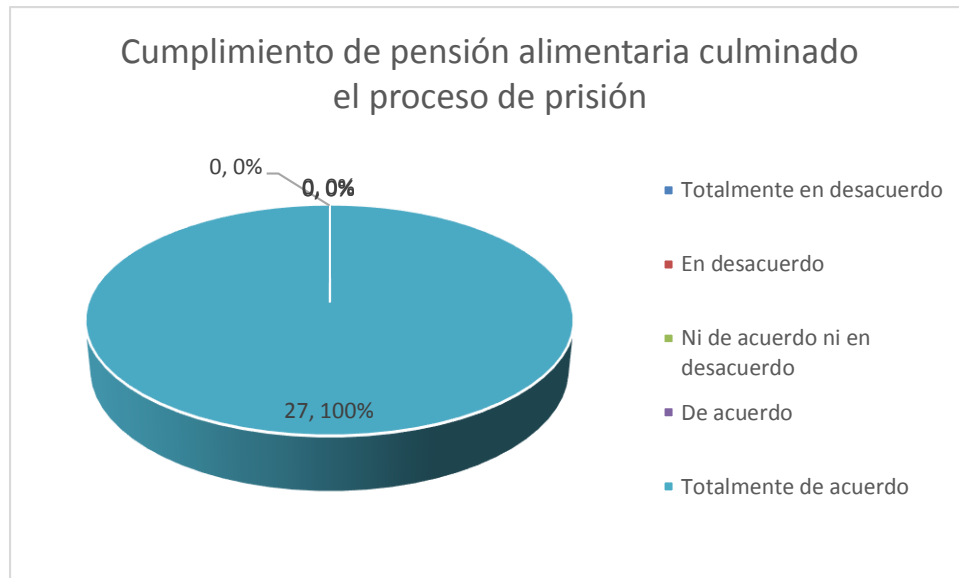


Además, tenemos que de los 77 casos registrados de pedido de revocatoria del Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque por el delito de O.A.F., todos han pagado la reparación civil y pensiones establecidas.



Por otro lado, se encontró que de los 7 egresos del penal registrados en el año 2012, se rehabilitaron 6; al igual que en los 11 egresos del 2013; mientras que en el 2014 no se encontraron registros de rehabilitados, a pesar que existe 1 egreso hasta la fecha, ya que, como ya se mencionó líneas arriba, la mayoría aún sigue cumpliendo su condena.

Así mismo, en cuanto al cuarto objetivo planteado en la investigación, no se han registrado casos de personas que han vuelto a delinquir, por lo que no existiría incidencia de los egresados del penal en la comisión de delitos. Además, las encuestas arrojaron que los ex reos cumplen actualmente con sus obligaciones alimentarias con normalidad (100%).



Finalmente, para responder con el último objetivo específico de la investigación, analizaremos y determinaremos si los fines de prevención, protección y resocialización se cumplen en los casos de revocatorias de la pena de los delitos de O.A.F.; y, de este modo, establecer en qué medida la prisión efectiva por revocatoria de la condicionalidad de la pena en los delitos de O.A.F. influye en el cumplimiento de dichos fines, siendo éste el objetivo general del estudio y que dará respuesta al problema planteado.

Para ello, sustentaremos la discusión en base a los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los reos y la teoría brindada por diversos autores.

En este sentido, el Art. IX del Título Preliminar del Código Penal señala taxativamente: “La pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora. Las medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación”. (Becaria, 2000, p. 132)

Asimismo, Hurtado (1997) nos dice que en el código penal peruano se determinan los fines de la pena, los cuales deben de cumplirse en diferentes esferas. La prevención estará a cargo de Sistemas de Prevención del delito, medidas legislativas y una buena y determinante participación de la Policía Nacional.

En este caso específico, según lo planteado por Hurtado, la prevención sí se cumple, pues para poder ingresar procesos por el delito de O.A.F. en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque, se ha tenía que realizar un trabajo a cargo de Sistemas de Prevención, a través de la participación de la Policía Nacional, quien es el órgano encargado de llevar a cabo la detención de los infractores o delincuentes.

Continuando con el aporte de Hurtado, la protección, está a cargo del Poder Judicial y los Sistemas jurisdiccionales al imponer pena a los infractores y delincuentes que pueden causar algún daño a la sociedad, a parte de la función de "castigo" la pena servirá para proteger a la sociedad de individuos con tendencias delictuosas.

En relación a lo anterior, Vásquez (2014) hace hincapié en lo que dice el artículo 53º del C.P., la misma que procede si el condenado no cumpliera injustificadamente con la pena impuesta por conversión (multa, prestación de los servicios asignados, o con las jornadas de días libres), la conversión de otorgada, sería revocada, debiendo entonces ejecutarse la pena prevista de libertad señala en la sentencia. Con la conversión de la pena, obliga al condenado por un lado a cumplir adecuadamente con la pena convertida y por otro lado a abstenerse de cometer un nuevo delito, de presentarse este último supuesto el art. 54º de C.P. indica que la revocación es automática si el condenado comete un delito doloso sancionado con pena privativa no menor de tres años, haciéndose hincapié en la nueva sentencia. Se revoca la suspensión de la pena, cuando se imponen varias reglas de conducta al condenado e incumple una sola, a pesar que el apremio diga claramente; en caso de incumplimiento, es decir de todas ellas, en forma plural, pues no se especifica si es solo por el incumplimiento de una o de cualquiera.

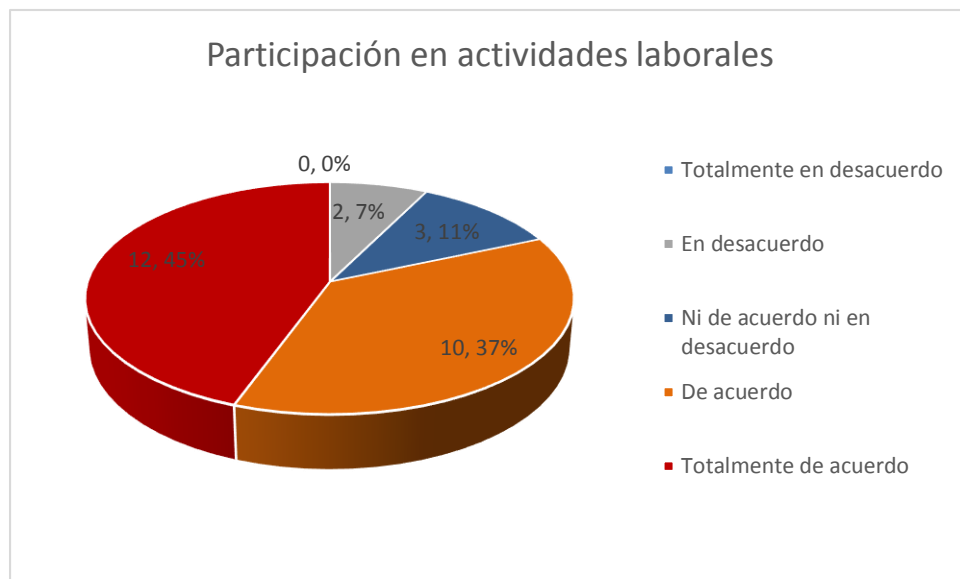
Agregando que “de las sanciones que establece el Art 59° del C.P. Obviamente la más grave, la más solicitada y menos deseada por los condenados, en ejecución de sentencia, es la Revocatoria de la suspensión de la ejecución de la pena por efectiva, esto es el cambio legal de su libertad condicional por efectiva”. (García, citado por Ocaña, 2009)

En este caso, sí se cumple el fin de protección, pues al darse la revocatoria por el delito de O.A.F., se ha respetado lo estipulado por el Poder Judicial y los Sistemas jurisdiccionales, al imponer la debida pena a los infractores y delincuentes que pueden causar algún daño a la sociedad. De este modo, la pena sirve para proteger a la sociedad de personas con tendencia a delinquir.

En cuanto a la resocialización, “está a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), quienes mediante medidas que ejecute en sus centros penitenciarios intentar conseguir la resocialización de los internos”. (Hurtado, 1997, p. 640)

Según el INPE, dentro de los medios de resocialización que utilizan con los internos figura el trabajo penitenciario, el cual es proporcionado por Administración Penitenciaria, a través de la Implementación de los talleres laborales (carpintería, zapatería, tejido a máquina, electrónica, mecánica automotriz, soldadura y forja, sastrería, hidroponía, confecciones, cerámica y telares) de los establecimientos penitenciarios en donde se vienen ejecutando pequeños proyectos de inversión.

De esto, se encontró, según un servidor administrativo del penal, que los internos del Penal realizaban talleres de cocina, panadería, electricidad, construcciones metálicas, zapatería y manualidades (varias). No obstante, los que no realizaban ninguna actividad, pagaban reforma; sin embargo, todos los internos sin excepción pagan este derecho de 30 soles al mes para efectos de la tramitación de beneficios penitenciarios. Además, las encuestas arrojaron que el 82% de los reos participaron adecuadamente en las actividades laborales establecidas por el INPE.



Sumado a esto, los resultados recogidos demuestran que los internos que egresaron del penal no han vuelto a delinquir en algún otro delito. Por tanto, se concluye que también se cumple con el fin de resocialización, pues a través de los talleres y diferentes actividades realizadas en el penal, ha influido de manera positiva al no incidir en cometer otro delito.

Por último, se lograr cumplir con la hipótesis planteada en esta investigación, pues al revocarse la condicionalidad de la pena en los delitos de O.A.F. del distrito de Lambayeque, comprendidos entre el período 2012-2014, se cumplen de manera efectiva los fines de prevención, protección y resocialización de la misma.

CONCLUSIONES

- El estudio arrojó que los fines de la pena: prevención, protección y resocialización sí se cumplen al revocar la condicionalidad de la pena en los delitos de Omisión de Asistencia Familiar del distrito de Lambayeque, en el período 2012-2014; ya que no existe un registro de reincidentes en dicho rango de estudio.
- La mayoría de los internos que egresaron del penal fueron rehabilitados. Sin embargo, el INPE no cuenta con una data de la situación actual de los rehabilitados.
- En su totalidad, los egresados del penal no presentaron incidencia en la comisión de delitos, siendo un indicador de su adecuada reinserción en la sociedad.
- Con la aplicación de la revocatoria se cumple con el fin de protección del bien jurídico familia.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda al sentenciado, que cumpla de manera expresa y correcta las reglas de conducta impuestas. Esta exhortación deberá efectuarse al momento de la lectura de la sentencia, puesto que esta constituye un principio-derecho de ejecución de las resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, remarcando que en caso de incumplimiento y producida la revocatoria de condicionalidad se le hará efectiva la pena, no pudiendo ser beneficiario de otro sustitutivo penal. Lo anterior significa que el Juez debe verificar que el condenado ha internalizado el beneficio que representa el subrogado penal aplicado.
- Recomendar que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) cuente con el registro correspondiente y detallado de las diferentes actividades de resocialización que realizan los internos en el Penal, y una data de la situación actual de los rehabilitados fuera de él.
- Que se profundice en nuevos estudios con relación a los delitos de Omisión de Asistencia Familia (O.A.F.), pues no se ha encontrado la bibliografía y los antecedentes suficientes de esa variable de estudio.
- Al existir casos de simulación de insolvencia económica por parte de algunos denunciados, configurado en el código civil, debe mantenerse en ese ámbito y no trascender al área penal. Por lo tanto, la sanción debe ser netamente económica, mas no de una privativa de la libertad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ASER, A., HIRSCH, H. Y ROXIN, C. (1992). De los delitos y de las víctimas. Ad Hoc SRL. Pág. 316.
2. BURGOS, V. (2010). LA LIBERTAD ANTICIPADA DEL ART. 491 DEL NCPP. Recuperado de: www.lozavalos.com.pe/alertainformativa/modulos/boletines/descargar.php?id=59
3. CAMPANA, M. (2013). Delito de Omisión a la Asistencia Familiar. Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Lima. Perú. Págs. 79
4. **Código Civil Peruano. Año (1991). Lima. Perú.**
5. Código Civil. (1997). Editora Normas Legales Sociedad Anónima. Tercera Edición. Trujillo, Perú
6. COLLAZOS, M. (2006). Derecho Penal I Capítulo 16. Delitos de omisión Curso 2006/07 Licenciatura en Criminología. UMU. España. Recuperado de: <http://www.marisolcollazos.es/Derecho-Penal-I/Derecho-Penal-I-16-Delitos-de-omision.html>
7. Constitución Política del Perú. (1993). Edición Oficial.
8. **Corte Superior de Justicia de Piura. (2014). Oficio Circular N° 055-2014-P-CSJPI/PJ. Piura. Recuperado de: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/808195004424885787eae7c58b202536/OFICIO+CIRCULAR+055-2014-CASACION_N_382-2012%5B1%5D.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=808195004424885787eae7c58b202536**
9. **Corte Suprema de Justicia. Sala Penal Permanente. (2012) Casación N° 382-2012-La Libertad. Sentencia de Casación. Lima. Recuperado**

de: <http://www.gacetapenal.com.pe/boletines-gpenal/ajuntosBol/ADJUNTO3.pdf>

10. Declaración de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
11. Declaración de los Derechos del Niño proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.
12. DE LA CRUZ, K. (2015). La no aplicación de la suspensión de la pena en los delitos de Omisión a la Asistencia Familiar. Universidad Privada Antenor Orrego. Perú. Recuperado de: <http://repositorio.upao.edu.pe/handle/upaorep/1838>
13. Enciclopedia Jurídica Omeba. (1993) Tomo I, Driskill Sociedad Anónima. Buenos Aires, Argentina. P. 645.
14. **FORES, E. (2014). Muchos varones, pocos padres: Incremento de los delitos de Omisión a la Asistencia Familiar. Recuperado de: <http://psicologiajuridica.org/archives/4484>**
15. **HERNÁNDEZ, R., FERNÁNDEZ, C. y BAPTISTA, P. (2010) Metodología de la Investigación. Escuela Superior de Guerra Naval. 4ta edición. Editorial Mc Graw Hill. México**
16. **HURTADO, J. (1997). Manual de Derecho Penal. Parte General. 2da Edición. Eddili. Lima. Pág. 640.**
17. **Instituto Peruano de Ciencias Penales. (1995). Derecho Penal. Parte General. Grijley. Lima. Pág. 909**

18. **JAKOBS, G.** ¿Cómo protege el Derecho penal y que es lo que protege? Ediciones Jurídicas Cuyo. Argentina. Pág. 10
19. **JAKOBS, G.** (1997). Derecho penal; Parte general. Fundamentos y teoría de la imputación. Marcial Pons Ediciones Jurídicas S.A. 2ª. Edición. Madrid. Pág. 45
20. **LA REPUBLICA.** (2015) Recuperado de:
<http://rpp.pe/peru/lambayeque/mas-de-90-mil-casos-de-omision-a-la-asistencia-familiar-en-lambayeque-noticia-906108>
21. **LEGIS.PE.** (2016). Omisión a la asistencia familiar: Capacidad económica se debe probar en sede penal
22. **MIR, S.** (2011). Derecho Penal en el Estado Social y Democrático de Derecho Penal. Pág. 159 y siguientes. Editorial Ariel.
23. **MUÑOZ, F. y GARCÍA M.** (1998) Derecho Penal Parte General. 3ra Ed. Tirant lo Blanch. Valencia. Pág. 679.
24. **OCAÑA, R.** (2009). El Art. 59 y 60 del Código Penal y la congruencia del incumplimiento de las reglas de conducta. Recuperado de:
<http://ocannaconsultorio.blogspot.pe/2009/09/el-art-59-y-60-del-codigo-penal-y-la.html>
25. **OPORTO, J.** (2010). Los Delitos de Omisión en el Código Penal Peruano. Universidad Andina del Cusco. Recuperado de:
<https://es.scribd.com/doc/38473196/LOS-DELITOS-DE-OMISION-EN-EL-CODIGO-PENAL-PERUANO>
26. **QUISPE, E.** (2014). “Problemas en la aplicación de la revocatoria de la suspensión de la ejecución de la pena y en su posterior conversión en la corte superior de justicia de Lambayeque”

27. RAE. (1992). Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española. Vigésima Primera edición. Editorial Espasa Calpe Sociedad Anónima.
28. REÁTEGUI, J. (2008). Derecho Penal, parte general. Ed. Gaceta Jurídica. Lima. Pág. 133.
29. REYES, J. (2013). Bien Jurídico en la versión de Jakobs. Recuperado de: <http://derechopenalmarginal.blogspot.pe/2013/09/bien-juridico-en-la-version-de-jakobs.html>
30. REYES, N. (2013). Derecho Alimentario en el Perú: propuesta para desformalizar el proceso. Pontificia Universidad Católica del Perú. Recuperado de: <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/viewFile/6433/6489>
31. REYNA, L. (2010). El Incumplimiento de Obligaciones Alimentarias desde el Derecho Penal: Cuaderno Jurisprudencial. Citando a Bramont Arias.- Bramont Arias Torres.- García Cantizano y Campana Valderrama en el Libro Delito de Omisión a la Asistencia Familiar. Lima. Perú. Pág. 26
32. ROJAS, F. (2014). Justificación Jurídica del Cese Anticipado de la Prisión por el Delito de Incumplimiento de Obligación Alimentaria. In Crescendo Derecho y Ciencia Política. Recuperado de: <http://revistas.uladech.edu.pe/index.php/increscendo-derecho/article/view/568>>. Fecha de acceso: 21 nov. 2016 doi:http://dx.doi.org/10.21895/in_cres_d.v1i2.568.
33. RUIZ, M. (2010). El Delito de Omisión a la Asistencia Familiar, Reflexiones, y Propuesta para la mejor Aplicación de la Normatividad que la regula. Recuperado de: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/39f6de8046d4713da1aea144013c2be7/delito_omision_asistencia_familiar+C+4.+10.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=39f6de8046d4713da1aea144013c2be7

34. **SEVILLANO, E., OTINIANO, V. (1994). Código de los Niños y Adolescentes. Editora Normas Legales Sociedad Anónima. Trujillo, Perú.**
35. **SIGNIFICADOS.COM. “Tipos de Omisión”. Recuperado de: /tipos-de-omision/ Recuperado de: <https://www.significados.com/omision/>**
36. **TAPIA. (2013). Citado por Campana Valderrama en su libro: Delito a la Omisión Familiar, y por Luis Manuel Reyna Alfaro. Cuaderno Jurisprudencial. Lima. Perú. Pág. 83**
37. **VÁSQUEZ, R. (2014). “Fines de la aplicación de la conversión de la pena impuesta por los juzgados penales de juzgamiento en la provincia de Chiclayo y la influencia de su aplicación en la resocialización de los sentenciados”. Págs. 14-22**

Anexos

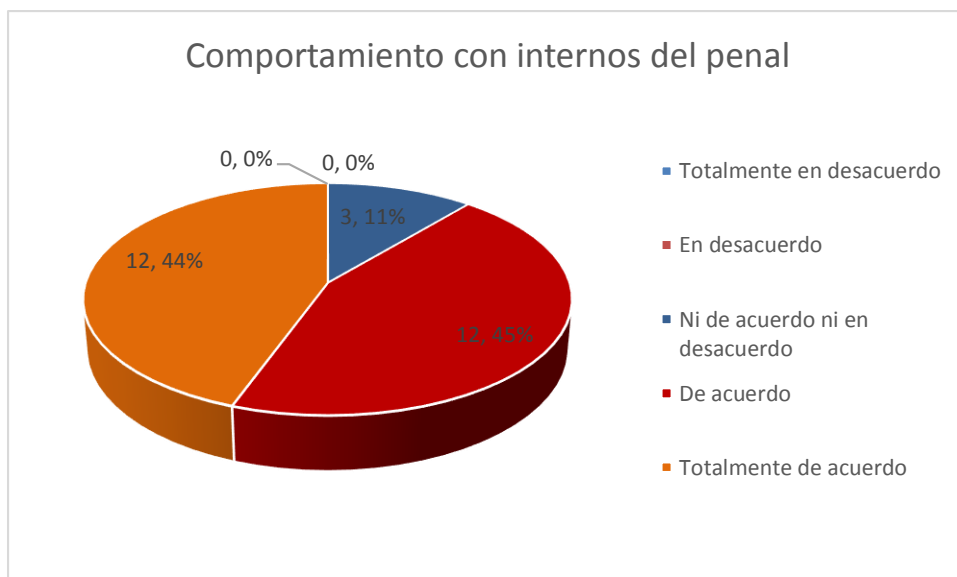
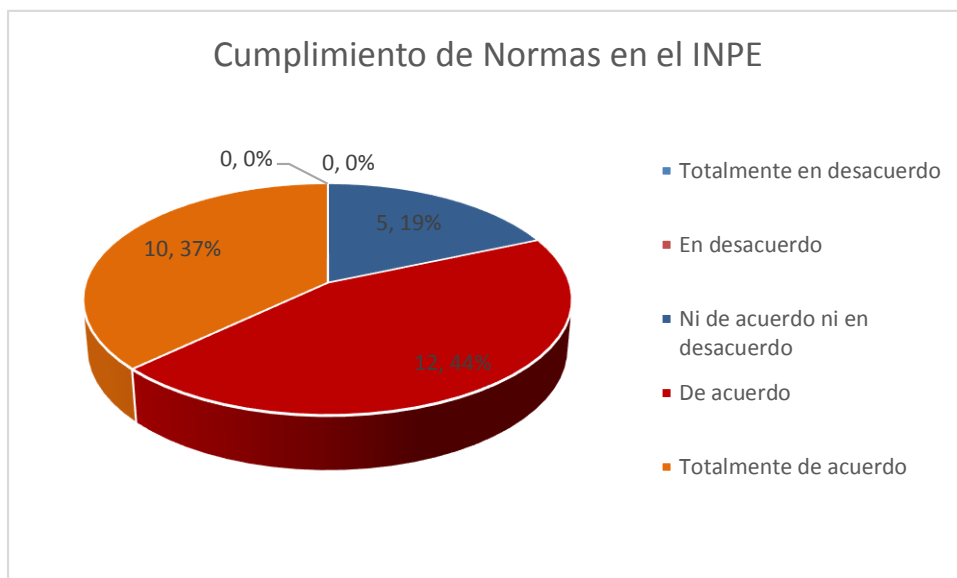
ANEXO N° 01: ENCUESTA

El presente cuestionario, tiene por finalidad conocer de qué manera se cumplen los fines de la pena en los casos de prisión efectiva por revocatoria en los delitos de Omisión a la Asistencia Familiar. De las preguntas que siguen, le solicitamos marcar la respuesta que le parezca más correcta

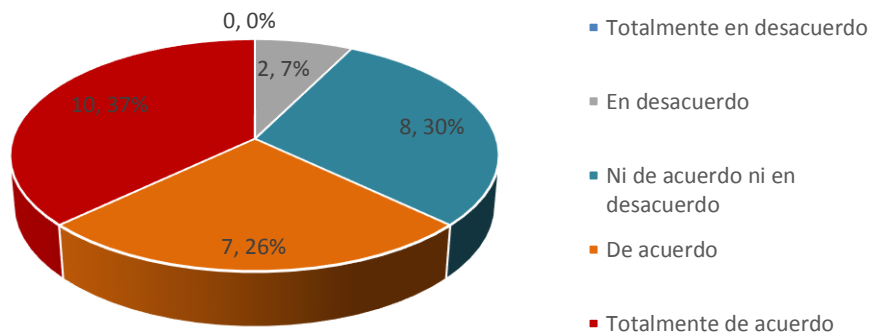
1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. De acuerdo
5. Totalmente de acuerdo

N°	PREGUNTAS	1	2	3	4	5
1.	¿El cumplimiento de las normas establecidas en el INPE fue adecuado?					
2.	¿Su comportamiento con los demás internos del penal fue el adecuado?					
3.	¿El trabajo colaborativo con los internos fue adecuado?					
4.	¿El pago de la pensión alimentaria y reparación civil se realizó satisfactoriamente?					
5.	¿El cumplimiento de las obligaciones alimentarias culminada la prisión efectiva se viene realizando con normalidad?					
6.	¿Las actividades educativas en el INPE se realizaron e implementaron adecuadamente?					
7.	¿Su participación en las actividades educativas fue frecuente?					
8.	¿Las actividades laborales (talleres) en el INPE se realizaron e implementaron adecuadamente?					
9.	¿Su participación en las actividades laborales (talleres) fue frecuente?					
10.	¿La asistencia médica en el INPE era la adecuada?					
11.	¿Acudía con frecuencia al centro de salud penitenciario?					

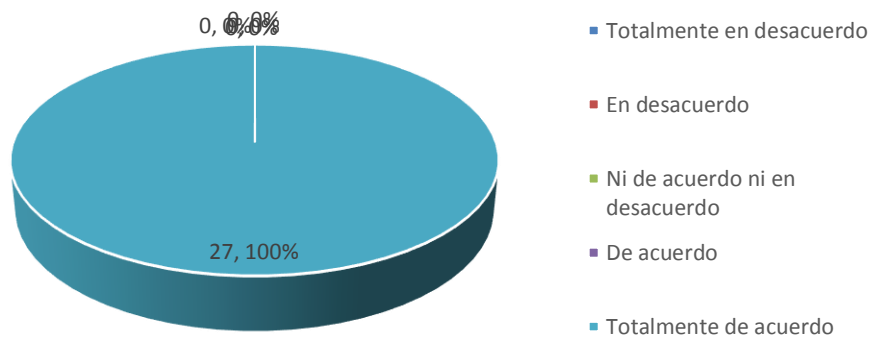
ANEXO 02: RESULTADOS ENCUESTAS APLICADAS A LOS REOS POR REVOCATORIA



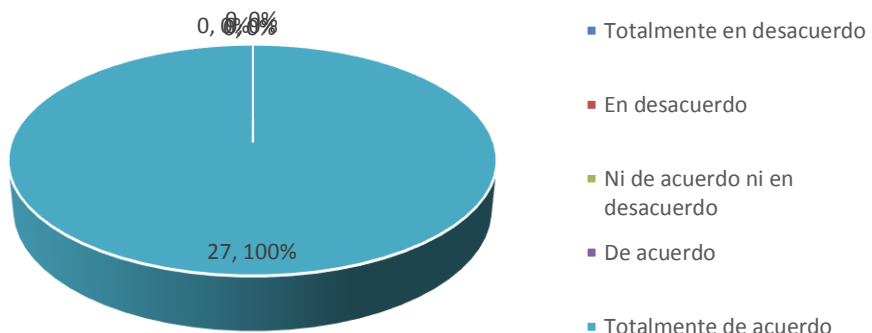
Trabajo colaborativo con internos



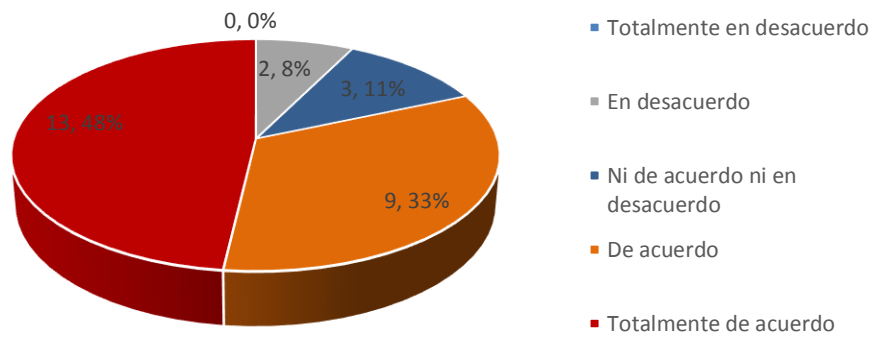
Cumplimiento de pensión alimentaria en proceso de prisión



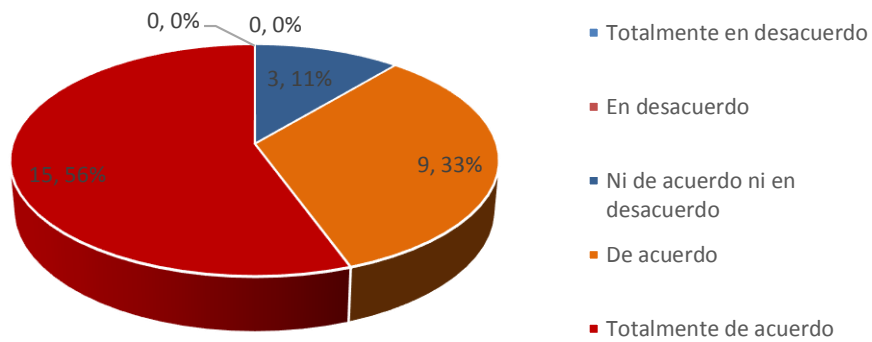
Cumplimiento de pensión alimentaria culminado el proceso de prisión



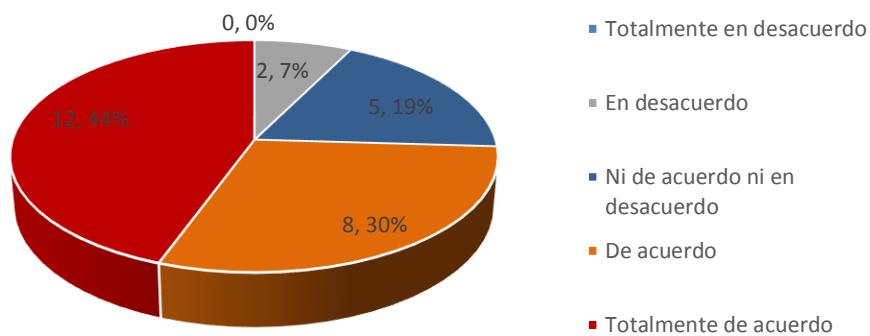
Satisfacción de actividades educativas en el INPE



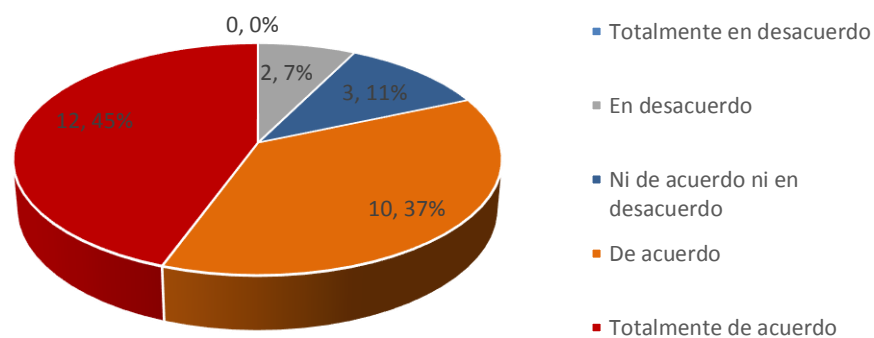
Participación en actividades educativas



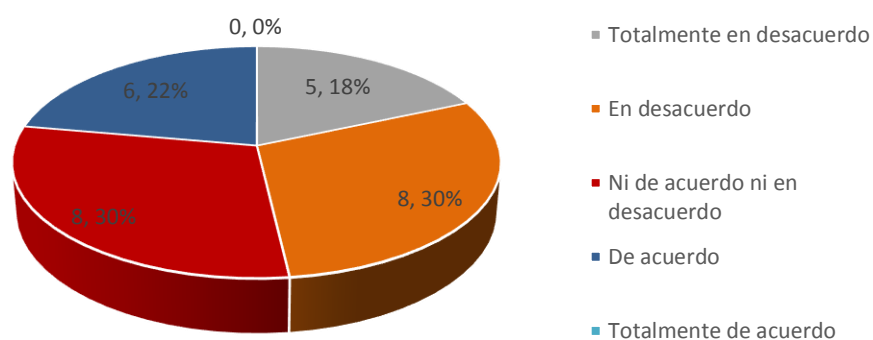
Satisfacción de actividades laborales en el INPE



Participación en actividades laborales



Satisfacción de la asistencia médica en el INPE



Asistencia al centro de salud penitencial

